

*A Dios, mis padres, mi esposa y
hermanos.*

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL ECUADOR

DISERTACIÓN DE PREGRADO

PARTICIPACIÓN PARITARIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS
ELECCIONES PLURIPERSONALES Y EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
EN EL ECUADOR

MARIO ANDRÉS PAREDES BALLADARES

Mayo, 2011

ABSTRACT

La participación política de mujeres en contiendas electorales se ha incrementado en los últimos años a un ritmo constante y prometedor. Las legislaciones latinoamericanas se han ajustado a las necesidades sociales para lograr una mejor representación de sus ciudadanos, aplicando principios de igualdad y otorgando medidas de protección efectiva a favor del sexo femenino. En el Ecuador, con la Constitución aprobada mediante Referéndum en el año 2008, se implementaron cambios drásticos sobre la participación equitativa entre hombres y mujeres en procesos electorales promoviéndose una participación paritaria inclusiva de hombres y mujeres. El desafío electoral de una participación paritaria, deviene de la preparación y capacidad política de los actores y actoras que intervienen en una contienda electoral. La presentación de listas para elecciones pluripersonales que sean regladas por ley a una alternancia y secuencia mujer-hombre u hombre-mujer dentro de una realidad política no acorde al requerimiento legal, puede inducir a la pérdida de representación democrática por inacción de los candidatos o candidatas elegidos. Mediante estudios históricos y casuísticos, se ha podido evidenciar la situación y evolución de la política femenina en el País. El razonamiento del efecto y aplicación de las normas electorales que buscan un acceso igualitario y equitativo a las contiendas electorales permite verificar la legitimidad de las normas incluías al régimen laboral nacional. Siendo que las leyes evolucionan con los principios y necesidades de la sociedad, el deseo de una democracia participativa, implica la renuncia de ciertos derechos y la capacitación en la búsqueda de un bien común de los sujetos que forman parte activa en una sociedad. La participación paritaria es una obligación histórica y moral sobre el acceso de la humanidad a una sociedad más justa e inclusiva.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	4
1. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL	4
1.1. EL SUFRAGIO COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN	4
1.2. PRINCIPIOS CLÁSICOS DEL SUFRAGIO	6
1.2.1. Sufragio Universal	6
1.2.2. Sufragio Libre	7
1.2.3. Sufragio Igual y Equitativo	8
1.2.4. Sufragio Directo	9
1.2.5. Sufragio Secreto	10
1.3. EL VOTO FEMENINO EN EL ECUADOR	10
1.3.1. Origen del Voto Femenino en el Ecuador	11
1.3.2. Régimen actual para la participación femenina en la Política Ecuatoriana	15
1.3.3. Igualdad de oportunidades en la participación electoral en el caso ecuatoriano	17
1.4. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PARIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTORALES	19
1.4.1. El hombre y la mujer en las democracias modernas	23
1.4.2. La paridad y la democracia	24
1.4.2.1. Equilibrio en la representación política	25
CAPÍTULO 2	28
2. CUOTAS ELECTORALES Y LIBERTAD DE ELECCIÓN	28
2.1. DISCRIMINACIÓN Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL	28
2.1.1. Comportamiento electoral	30
2.1.2. Discriminación Electoral	33
2.1.2.1. Discriminación Positiva	34
2.1.2.1.1 Efectos de la Discriminación Positiva	37
2.1.3. Acceso a una política participativa.	38
2.1.3.1. Igualdad de participación por género	38
2.1.3.2. Situación en América Latina	40
2.1.4. La libertad de elección y sus límites normativos	41
2.1.4.1. Distribución reglada de candidatos y su incidencia en la libre elección	41
2.2 LA ALTERNABILIDAD y SECUENCIALIDAD EN LISTAS PLURIPERSONALES	45
2.2.1. Inicios de la alterabilidad y secuencialidad en el Derecho Electoral	45
2.2.1.1. Efectos jurídicos en los principios democráticos	46
2.2.2. El problema de la alternancia	49
2.2.3. Paridad en las Entidades de Control Electoral	50
2.2.4. Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones	51
2.2.5. La secuencialidad como medio de participación más justa en los órganos electorales	52
2.3. EL LIBRE ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN	

POPULAR POR PARTE DEL GÉNERO FEMENINO	54
2.3.1. Áreas sensibles en la participación política reglada y su posible problemática.	55
2.3.2. Situación actual de la mujer en los cargos públicos.	56
2.3.2.1. Índices femeninos en la toma de decisiones en cargos públicos	58
2.3.3. Comparación de la capacitación de gestión política por parte del género femenino y masculino	59
CAPÍTULO 3	53
3. LA PROTECCIÓN A LA MUJER Y LA PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LA VIDA POLÍTICA ELECTORAL	62
3.1. LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLITICOS	62
3.1.1. El acceso real de la mujer en la toma de decisiones	64
3.1.1.1. Género y Calidad de Gestión en Cargos Públicos	67
3.1.2. Medios de protección jurídicos para la participación.	68
3.1.2.1. Presupuestos Participativos	68
3.1.2.1.1. Presupuestos participativos para hombres y mujeres	69
3.1.2.2. Proyecto Participativo en la Asamblea Nacional	71
3.1.3. Antecedentes en la Constitución de 1998 y Convenios Internacionales sobre Participación Paritaria	73
3.1.4. Resultados políticos de la participación femenina en el Ecuador	75
3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL	77
3.2.1. Función Electoral.	
3.2.1.1. El Concejo Nacional Electoral	77
3.2.1.2. Acciones del Tribunal Contencioso Electoral.	78
3.2.2. Educación Electoral	81
CAPÍTULO 4	83
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
4.1. Conclusiones	83
4.2. Recomendaciones	87
BIBLIOGRAFÍA	90

INTRODUCCIÓN

Desde las primeras formas de gobierno democrático moderno, existió una limitación hacia el sexo femenino sobre cualquier tipo de participación social. Incluso en la Revolución Francesa, donde pregonó la máxima “*Liberté, Égalité et Fraternité*” (Libertad, Igualdad y Fraternidad), propiciando la igualdad de los seres humanos en el campo la político, social y cultural, no se consideró que las mujeres pudiesen ser parte del colectivo denominado “ciudadanos”, al cual únicamente podían pertenecerlos hombres¹.

Siglos pasaron y sin embargo el problema persistió emigrando hasta América. Ya desde los inicios de la República del Ecuador, la mujer fue víctima de esta grave dolencia incluyendo a la desigualdad política y social, pues su calidad de ciudadana incluyendo el acceso a derechos civiles y políticos no fueron inicialmente reconocidos.

El 9 de junio de 1924 con la luz otorgada al voto femenino en el Ecuador² de la mano de Prócel, nacieron para la posteridad, grupos femeninos de conciencia social en los que las mujeres del Ecuador proclamaban:

*“Queremos una voz femenina que sepa defender nuestros derechos, pospuestos injustamente por sociedades constituidas bajo la prepotencia viril”*³.

Palabras que, por cierto, coinciden en concepto y visión con el pensar femenino de la Revolución Francesa dos siglos antes.

¹ "El hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales, hasta el extremo de que no se encontrará a nadie de entre los que los han perdido que piense siquiera en reclamarlo, ni crea haber sido objeto de una injusticia.(...) Por ejemplo, ¿no han violado todos ellos el principio de la igualdad de derechos al privar, con tanta irreflexión a la mitad del género humano del de concurrir a la formación de las leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía? ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito incluso cerca de los hombres eruditos, que el de ver invocar el principio de la igualdad de derechos (...) y de olvidarlo con respecto a doce millones de mujeres?" (Condorcet), son algunos comentarios sobre la Revolución Francesa acerca de la definición que se dio a la ciudadanía y a quienes se les podía considerar como ciudadanos.

² De acuerdo a registros históricos, el Ecuador un de los pioneros en reconocer el voto femenino en América del Sur, siguiendo muy de cerca a Uruguay.

³ ESTRADA Jenny, **Una mujer total, Matilde Hidalgo de Procel**, Universidad de Guayaquil, 1980, pp. 133

La participación de la mujer en el Congreso Nacional⁴ se vio finalmente consolidada gracias a movimientos feministas como la Alianza Femenina Ecuatoriana, que para el año de 1941 (aunque casi 20 años después del primer voto por una mujer en el país) tenía una representante.

En la actualidad, y con la publicación de la Constitución de la República del Ecuador⁵ aprobada por Referéndum el 28 de septiembre de 2008, se desarrolló un nuevo sistema de participación política ciudadana para elecciones democráticas, el mismo que adicionalmente incide (o trata de hacerlo) en las instituciones administrativas públicas y de control social. Este sistema político-electoral, implementa en sus bases, la necesidad de participación y cooperación de todos los sectores de la sociedad, contando desde la fuerza pública hasta las personas mayores de diez y seis años, incluyéndose de manera conjunta, la participación e inclusión de las mujeres en los ámbitos sociales de un entorno político.

Las instituciones consagradas en la Constitución Ecuatoriana comprenden como un antecedente a las normas y principios incluidos por la Constitución Política del Ecuador del año 1998 así como en la Ley de Elecciones y Partidos Políticos, las que desde tiempo atrás ya propiciaban la participación política activa y equitativa entre hombres y mujeres.

La protección a la mujer en la vida política de una nación, al igual que la obligación de participación igualitaria y consecutiva de derechos, es una labor que ha venido construyéndose sobre las bases de la fundación del ideal femenino en el País. Con el paso del tiempo y el progresivo acceso de la mujer a la política ha existido un cambio de la ideología masculina sobre el control del poder, por una combinación equivalente e igualitaria para hombres y mujeres. Tanto así, que hasta ahora, se ha instaurado, como un principio constitucional, el principio de participación femenino en el ámbito político.

La importancia alcanzar el equilibrio adecuado de esta combinación, conlleva necesariamente al establecimiento de bases de igualdad social entre ambos grupos humanos y por lo tanto de una sociedad más justa y balanceada.

⁴Matilde Hidalgo de Prócel, fue elegida en calidad de diputada suplente, para el Congreso Nacional de 1941, por el partido Alianza Femenina Ecuatoriana.

⁵Registro Oficial n.º 449, de 20 de octubre de 2008

Por la evolución de las normas jurídicas que buscan la equidad femenina en el ámbito político ecuatoriano, estas se encuentran dispersas en varios cuerpos normativos, por lo que resulta indispensable un estudio práctico y real sobre el fenómeno femenino en el derecho electoral ecuatoriano, basado en la participación electoral política de los sujetos así como los espacios creados para la promoción de los derechos civiles de las mujeres. En las normas que regulan a los partidos y movimientos políticos se han incluido mecanismos de aceptación e incentivos para propiciar políticas más abiertas con relación a los grupos sociales que intervienen en ella.

La creación jurídica sobre la distribución paritaria en las elecciones pluripersonales de las candidaturas, se fundamenta principalmente en la libertad e igualdad de los seres humanos para poder participar en la vida política de un país. Siendo la base de la democracia, el derecho de elegir y ser elegido, la protección de este derecho no puede descansar simplemente en un precepto de carácter general, sino que debe implementarse a través de distintas vías de auxilio debidamente normadas.

Precisamente, la participación paritaria es una vía de auxilio que busca involucrar a la mujer en el acceso a los cargos de elección popular, bajo similares condiciones y oportunidades que los hombres.

La concientización ciudadana para provocar una participación razonada, no solo depende de la norma, sino también de la educación en derechos de la sociedad civil. El conocimiento jurídico debe alcanzar al cívico para interponer una clara vía de acceso al goce pleno de los derechos políticos.

CAPITULO I

1. LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

La participación electoral, en primera instancia, depende de las personas que *participan* en ella, es decir, si una sociedad desea participar en democracia, la sociedad debe involucrarse en ello. Tanto electores como elegidos, mujeres y hombres, serán los responsables de llevar una democratización saludable que abarque a todas las comunidades incluidas dentro de una circunscripción territorial de un sistema electoral. Los medios y métodos para que esta sociedad participativa se involucre en los sistemas electorales deben ser flexibles para que consideren los avances políticos de la sociedad. Es por ello que, al igual que la evolución social, la participación electoral ha cambiado de términos, sujetos y capacidades con el fin de ser lo más incluyente posible.

Con la aprobación del voto femenino su consecutiva participación femenina política, hasta la secuencialidad y alterabilidad en elecciones pluripersonales, pasando por la paridad de elecciones en el Ecuador, se ha impulsado un cambio en el sistema electoral para poder obtener una representación equitativa en género sobre los campos políticos y sociales. Las variaciones propuestas a nivel electoral, incitan a nuevas formas de gobierno y participación, buscando motivar hombres como mujeres a la pertenencia a una sociedad política de igualitaria, cuyo objetivo ulterior es lograr la igualdad en la representación social, con un enfoque equitativo e igualitario que establezca decisiones políticas y sociales de la mano con la creación de medidas y principios universales adoptados por ambos géneros sociales.

El sufragio, por su parte, es una de las principales formas que permiten la participación de los sujetos de una comunidad, siendo que este ha sido la vía para poder tomar decisiones en sociedad y la democracia lo utiliza para legitimar su actuar.

1.1. EL SUFRAGIO COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN

La democracia se relaciona del apego que tenga la sociedad a la propia determinación de participación, en otras palabras, para que exista una comunidad

que pueda vivir en democracia, es necesario, que tal comunidad participe en forma colectiva y se involucre íntegramente en los deberes y obligaciones democráticas, incentivando a sectores no participantes a que se involucren y participen. En este sentido, Norberto Bobbio señala:

“El proceso de ampliación de la democracia en la sociedad moderna no se presenta solamente a través de la integración de la democracia representativa con la democracia directa, sino también, y sobre todo, mediante la extensión de la democratización, entendida como institución y ejercicio de procedimientos que permiten la participación de los interesados en las deliberaciones de un cuerpo colectivo, en cuerpos diferentes de los políticos. [H]oy, quien quiera tener un indicador del desarrollo democrático de un país, ya no debe considerar el número de las personas que tienen derecho al voto, sino el número de los lugares diferentes de los tradicionalmente políticos en los que se ejerce el derecho al voto”⁶

Por ende, para una participación general o colectiva, es inexorable que se respeten y se cumplan principios inherentes a la democracia, tales como el derecho del sufragio.

El sufragio, ideológicamente, es la forma mediante la cual, una comunidad puede hacer valer su decisión en mayoría o de otra y si bien es un método para poder llegar a consensos⁷, por motivos de este estudio, será definido como un derecho político y constitucional para elegir y ser elegido para cargos públicos. Se pueden diferenciar doctrinariamente de dos formas del sufragio: a) el sufragio activo; y, b) el sufragio pasivo.

Sufragio activo es aquel ligado al derecho universal de las personas en un estado, ya sea democrático o no, de poder acceder al voto y por lo tanto poder elegir.

⁶BOBBIO, Norberto. Los principios de la democracia. Barcelona. 1985. pág. 18

⁷El sufragio, en su sentido más simple, puede encontrárselo con el derecho al voto. El voto está presente en cualquier orden social donde se requiera tomar una decisión general y grupal. Desde la Iglesia (voto cardenalicio para elegir al Papa) hasta las Sociedades Anónimas (voto para toma de decisiones de directorio) la acción de elegir o tomar una decisión grupal o social, se materializa con el voto individual.

Sufragio pasivo se refiere a la capacidad de poder ser elegido, es el complemento del derecho político y se relaciona con las limitaciones establecidas en la ley para poder postularse en elecciones para cargos públicos.

Cabe señalar que es imposible la existencia de un proceso de sufragio legítimo y válido sin la existencia de ciertos principios que, más que bases, son requisitos para el buen funcionamiento y representación de la generalidad de electores y elegidos en democracia. Dichos principios, han sido denominados como *Principios Clásicos del Sufragio* y son comúnmente identificados como: Universal, Libre, Igual, Directo y Secreto.

1.2. PRINCIPIOS CLÁSICOS DEL SUFRAGIO

1.2.1 Sufragio Universal

El principio del sufragio universal, se encuentra ligado al derecho de elegir y ser elegido, sin considerar raza, sexo, situación social o religión. Si bien, se ejercen ciertos requisitos para poder ejercer el voto, esto no significa que se viole o altere el principio mismo. Algunos requerimientos tales como: edad mínima, nacionalidad, residencia, no encontrarse en interdicción, así como el goce de los derechos civiles o políticos, no afectan el derecho a un sufragio universal, dichos límites o requerimientos están implementados en virtud de la realidad social existente en un país determinado. Por otro lado, en el caso del ejercicio pasivo del principio del sufragio universal, también suelen determinarse ciertas características ha ser cumplidas para poder ejercer este derecho. Tales capacidades suelen estar en relación a edad máxima y mínima, preparación académica y actividad productiva actual.

En los estados latinoamericanos, el principio del sufragio universal ha sido bien identificado y se encuentra activo y protegido en la totalidad de países, pertenecientes a esta región. Por su parte, el Ecuador, con el establecimiento de la constitución de 1978 – 1979 donde el derecho para los analfabetos se torna facultativo, siendo que todos los ciudadanos ecuatorianos legalmente capaces y en goce de sus derechos políticos acceden al sufragio, se podría establecer que el

Estado Ecuatoriano, ya desde esa década reconoció un derecho universal del sufragio.

1.2.2. Sufragio Libre

Partiendo de una definición simple, la idea de un sufragio libre está radicada en la concepción que dicho sufragio deba realizarse sin coacción o inclinación externa, provocada por cualquier forma ilegal, que obligue a determinada persona a favorecer a otra. Ahora, intensificando el estudio sobre este principio, el establecimiento de una elección libre, va de la mano con la probabilidad existente de poder *elegir* entre opciones. Es decir, en el caso que se impida más de una posibilidad para elegir, el sufragio ha dejado de ser libre e inclusive ha dejado de ser sufragio.

En la práctica, se puede interrelacionar el principio del sufragio libre, con el principio del sufragio secreto. Aunque los dos principios coexisten, no pueden ser confundidos, pues podemos encontrar casos en los cuales existen votos libres y no secretos o votos secretos y no libres. Adicionalmente, el principio sobre el sufragio libre, conlleva de manera conjunta, a varios derechos humanos, tales como la libertad de asociación a un determinado movimiento u organización política, o libertad de libre reunión, derechos básicos para el establecimiento de sectores políticos o ideologías en nacimiento.

La libertad de sufragio, también va de la mano con el nacimiento de la libertad política, es uno de los principios *sine qua non* para la existencia de una democracia real. Donde no se permita una participación democrática libre y sin restricción política, no existirá una democracia.

La participación en base a una libertad política, puede darse en dos efectos, el primero, es una participación pasiva, la misma que se radica en el hecho de elegir y una participación activa que está encaminada en la acción del buscar ser elegido.

Para el goce pleno de una libertad política, esta debe extender su protección a todos los individuos en una sociedad, de tal forma que, la comunidad en general

posea el conocimiento para elegir y ser elegido de manera consiente e informada. Sin estos requisitos, no podría existir libertad política y por ende una democracia representativa real, es por eso que la protección a esta libertad, debe constar con los mecanismos jurídicos necesarios en conformidad con las normas constitucionales y bases democráticas que logren una representatividad de la comunidad

1.2.3. Sufragio Igual y Equitativo⁸

El principio de Equidad, en el ámbito democrático, implica la participación equivalente de todos los electores en una contienda bajo *igualdad de condiciones*. Por su parte, la Igualdad en el sufragio, comúnmente se define como: *una persona es igual a un voto*. Para la celebración de un proceso electoral, que busque la participación de una comunidad, el respeto a los principios de equidad e igualdad es indispensables, siendo que si en un país dónde el servicio público y los medios de comunicación del Estado, mantienen una estricta lealtad política con el partido gobernante generalmente, se producen desventajas respecto a las escalas electorales buscadas por otros partidos.

En el sentido de este estudio, la equidad e igualdad, radican en la capacidad que tiene tanto el hombre como la mujer en capacidad de sufragar, de poder elegir y de ser elegidos. La equidad, a decir de Carlos Quiñones Tinoco, busca que cada una de las partes consiga un acceso justo, para lo cual este autor, empareja el significado de equidad con justicia, promoviendo a que con la equidad política, exista una equidad educativa, mediante la aplicación de programas compensatorios orientados a la concientización sobre equidad entre grupos sociales, para de esta manera, lograr una igualdad entre hombres y mujeres⁹.

La Igualdad radica, en que cada ciudadano, ciudadana, partido, candidato o candidata, consiga el mismo e *igual* acceso y oportunidad y de esta manera acceder a un proceso electoral o a un cargo político. Para poder lograr ese acceso igualitario, se debe tener en consideración dos aspectos, primero, es el campo subjetivo, siendo este el hecho de la persona que desea acceder al cargo político,

⁸Si bien tanto Equidad como Igualdad, pueden ser vistos como dos principios democráticos y electorales distintos, se los ha permitido unir, en vista de su proximidad e interrelación para objeto de este estudio.

⁹QUIÑONES TINOCO, Carlos Sergio, La equidad en la Contienda Electoral. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, pp 32 - 35

su entorno personal y capacidad política educativa, así como su inmersión en la política. El segundo, es el campo objetivo, en el cual se toma en consideración a la población y la capacidad de elegibilidad de un ciudadano o ciudadana, con características sociales determinadas.

De acuerdo al proyecto ACE¹⁰, los géneros participantes en un proceso electoral, deben tener una participación igualitaria y equitativa para poder cumplir con los principios democráticos y lograr una representación más real y efectiva¹¹.

Quiñones Tinoco concluye que, tanto la equidad como la igualdad electoral adquieren un sentido de beneficio, a favor de los entes políticos en desventaja, la cual que puede ser superada en la medida que su acción y oferta política impacten en el cuerpo electoral y obtengan de éste, la confianza para contribuir a la integración de la representación popular y acceder al ejercicio del poder público¹².

1.2.4. Sufragio Directo

Este principio radica en la imposibilidad de una representación electoral a través de intermediarios. El sufragio directo, trata de establecer un vínculo vertical entre electores y elegidos. Deben ser los mismos ciudadanos los que deben elegir a sus líderes para cargos públicos, sin intermediarios que decidan por ellos.

Si bien en algunas naciones se establece un determinado sistema de participación electoral que implique la elección de intermediarios entre electores y elegidos para el ejercicio de un cargo público, situación denominada como *elecciones indirectas*, cabe destacar que es el elector quien elige a los intermediarios dentro de una orientación política o dentro de un partido determinado, sin que el intermediario pueda tomar su decisión fuera de esta selección.

¹⁰The ACE Electoral Knowledge Network, (Proyecto ACE) es una entidad sin fines de lucro formada por organismos internacionales como la Unión Europea, el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se exponen investigaciones en el campo electoral para el desarrollo de la democracia. <http://aceproject.org/about-es>

¹¹Proyecto ACE, Condiciones de Equidad en la Contienda Electoral. <http://aceproject.org/main/espanol/pc/pc21.htm>

¹² QUIÑONES TINOCO, Carlos Sergio, La equidad en la Contienda Electoral. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p. 37.

1.2.5. Sufragio Secreto

Este principio busca la privacidad de la decisión que determinado elector realice con respecto a su participación en un proceso electoral. Con el sufragio secreto se pretende garantizar de forma jurídica las decisiones de los participantes en las elecciones.

Adicionalmente, la norma electoral nacional reconoce al *Sufragio Obligatorio*¹³ como principio regulador y doctrinario que a demás de ser compatible con los estudiados anteriormente, los amplía y protege.

En el Ecuador se ha establecido el principio del sufragio obligatorio, el mismo que hace necesario cumplir con el deber de ejercer el derecho electoral. Doctrinariamente, la obligación de participar en un proceso electoral, se ve establecida por el deber cívico que implica tal participación para los fines del estado y la cuota de representación política. En determinadas naciones, también se justifica la participación obligatoria en elecciones en vista de la *legitimidad* que la misma otorga a los procesos electorales llevados a cabo. Por ejemplo, puede producirse el caso que determinado grupo político con un amplio apoyo en ciertos grupos sociales, incite al ausentismo a un proceso electoral en vista de la descalificación de uno de sus candidatos, afectando de esta manera a todo el proceso y a la legitimidad social del candidato elegido.

1.3. EL VOTO FEMENINO EN ECUADOR

Desde los inicios de la lucha por la independencia en Latinoamérica, personajes de destacada iluminación intelectual, como el venezolano Francisco De Miranda, se preocuparon por dar a la mujer una calidad ciudadana superior de la que poseía o comúnmente era designada por las leyes de ese tiempo. En una carta dirigida a Jérôme Pétion en 1792, miembro de la Convención Nacional Francesa como delegado de Haití, De Miranda, opina sobre la inclusión política de las mujeres de la siguiente manera:

¹³ Artículo 62 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:

Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

“Os recomiendo una cosa sabio legislador: las mujeres. ¿Por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los individuos, las mujeres, no están directas o indirectamente representadas, mientras que sí están sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres hacen a su gusto?”.

“¿Por qué al menos no se les consulta acerca de las leyes que conciernen a ellas más particularmente como son las relacionadas con matrimonio, divorcio, educación de las niñas, etc.?”.

“[L]e confieso que todas estas cosas me parecen usurpaciones inauditas y muy dignas de consideración por parte de nuestros sabios legisladores”¹⁴

Aunque De Miranda fracasó en sus intentos libertarios, en el criterio de los Libertadores de la época, se sentó una tenue base ideológica sobre la participación política femenina, con los cuales se relacionó intelectualmente.

Específicamente, en nuestro país, desde “Manuelita” Sáenz con su importantísimo actuar político, se buscó una participación femenina, aunque muchas veces no ratificada por los grupos de poder dominantes.

A finales del siglo XIX, se empezó a fraguar los pilares que fundamentarían una participación política femenina en las ya formadas, repúblicas latinoamericanas. Con las ideas exportadas de los grupos feministas europeos y americanos, se inicia en América Latina un proceso autónomo de perfeccionamiento de ideales y principios generales para generar un actuar político equilibrado en género. Evoluciona al igual que la sociedad, una conciencia de igualdad de oportunidades para todos y por todos.

1.3.1. Origen del voto femenino en el Ecuador.

El género femenino en el Ecuador, no gozó de derechos políticos entre los años de 1830 y 1884, debido a que el país, después de su independencia, heredó los valores y prácticas instaurados en el derecho colonial heredado de Europa. Sistema que a la mujer le otorgaba una calidad de incapaz relativa; que se encontraba sometida a la tutela del padre, en el caso de ser soltera, o a la del marido si estaba casada. Es decir, la mentalidad de la época excluía, entre otras cosas, la participación de las mujeres en

¹⁴Carta de Francisco Miranda a Jérôme Pétion. 26 de octubre de 1792. En: Bohórquez, Carmen. Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de América Latina. Fundación editorial el perro y la rana. Gobierno bolivariano de Venezuela. Tercera edición revisada y ampliada. Caracas, Venezuela. 2006.

la vida política del Estado¹⁵. Es importante resaltar que se logra un cambio sustancial con la expedición del Decreto Supremo No. 68 en 19 de diciembre de 1895 mediante el cual se declaraba a las mujeres jurídicamente habilitadas para el ejercicio de cargos públicos. Además organizaciones de tipo civil trataron de disminuir la situación de dependencia de la mujer al hombre.

Después de la Revolución Liberal, acareada por el General Eloy Alfaro, las ideas de un sufragio femenino empezaron a tomar forma. La Revolución Alfarista sentó en el Ecuador, principios legales para que las mujeres ecuatorianas accedan a una educación general, a un trabajo más equitativo, a una protección de los derechos y por último a derechos de ciudadanía y sufragio. La primera Constitución Liberal de 1897, eliminó el requisito establecido por la Constitución de 1844, en la cual se establecía en su artículo noveno que para ser ciudadano, se requería ser “*varón, saber leer o escribir y hayan cumplido veinte y un años o hubieren sido casados*”. La Constitución Liberal de 1897, estableció en su artículo octavo que para ser ciudadano simplemente se requiere, “[L]a edad de dieciocho años y saber leer y escribir”.

Bajo el amparo de la Constitución de 1906 la primera médica ecuatoriana, Matilde Hidalgo de Prócel¹⁶, exigió al Registro Electoral de Machala su empadronamiento en las listas de electores con la finalidad de ejercer su derecho al voto. El Registro Electoral de Machala emitió una consulta administrativa al Parlamento y al Honorable Consejo de Estado el 9 de junio de 1924 para solucionar la discrepancia social, tras el pronunciamiento del Consejo de Estado se estableció que al no existir una prohibición expresa al voto femenino, la definición de ciudadanía establecida en el artículo 13 de la Constitución de 1906 debía entenderse que abarcaba tanto a hombres como mujeres¹⁷.

15 GRIJALVA JIMÉNEZ Agustín, *Elecciones y Representación Política*, Quito, Corporación Editora Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, 1998, pp. 95-98.

16 Adicionalmente, Matilde Hidalgo de Porcel, también fue fundadora y candidata del movimiento político femenino que logró tener representación en el Parlamento, aunque Hidalgo participó como Parlamentaria suplente

17 GRIJALVA JIMÉNEZ Agustín, *Elecciones y Representación Política*, Quito, Corporación Editora Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, 1998, pp. 98-100

Matilde Hidalgo de Prócel sufragó en 1925, y en 1929 el Ecuador reglamentó y reconoció el derecho de la mujer al voto, convirtiéndose así Ecuador, junto con Uruguay¹⁸, en los primeros países de Latinoamérica en reconocer el voto femenino.

En la Constitución de 1929¹⁹ existió una total inclusión del derecho de la mujer al sufragio, sin que se diferencie en las normas jurídicas el sexo de los votantes. Es importante señalar que aunque se permitió el voto sin diferenciación de sexo, era todavía indispensable que el votante sepa leer o escribir y en el caso femenino era facultativo, tal como se lo expresó en la Constitución de 1946²⁰, eximiendo todavía a la mujer de un rol político.

Es solamente para la Constitución de 1967²¹ que se equiparan los derechos políticos de los ciudadanos habiéndose establecido un voto obligatorio sin importar el género. Aunque ya para esos días, se había logrado una participación femenina activa en elecciones, todavía existieron muchos inconvenientes para que la mujer participe y acceda a cargos públicos, o sea directiva de movimientos políticos. Es por esta razón que a partir de la Constitución de 1998, se adoptaron medidas de discriminación positiva para solucionar o intentar solucionar la falta de igualdad material entre hombres y mujeres en el sector político.

En el artículo 102²² de la Constitución de 1998, se establece una medida que impulsó dramáticamente la participación de la mujer en la política ecuatoriana. La implementación de una protección equitativa de hombres y mujeres en: (i) la conformación de la dirigencia de los partidos; y, (ii) las listas de candidatos para procesos de elección popular, que entre otros incentivos públicos, fueron un gran cambio significativo (aunque sensible) para la opinión pública.

¹⁸ La Constitución Uruguaya de 1918, otorgó igualdad de derechos electorales a hombres y mujeres. En Junio de 1927, fue una ciudadana brasileña quien ejerció, por primera vez, el derecho al voto en Uruguay. En vista de un plebiscito en la localidad de Cerro Chato por la pertenencia a la jurisdicción del Distrito Treinta y Tres. El voto femenino en Uruguay fue reglamentado en 1932 siendo que en el año de 1938, las mujeres ya pudieron participar ampliamente y por primera vez de manera general, en elecciones nacionales para presidente.

¹⁹ Constitución Ecuatoriana de 1929: Título III Artículo 13: “**Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir.**”.

²⁰ Constitución Ecuatoriana de 1948: Artículo 22.

²¹ Constitución Ecuatoriana de 1967: Artículo 70.

²² Constitución Ecuatoriana de 1967, Artículo 70

²² Constitución Ecuatoriana de 1998 Artículo 102: **El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos.**

Mediante la Disposición Transitoria Décimo Séptima del mismo cuerpo constitucional, se intentó reglamentar y a la vez implementar expresamente, el principio establecido en su artículo 102, estableciéndose un porcentaje obligatorio de mujeres en un mínimo de veinte por ciento²³ en las listas de elecciones pluripersonales. Siendo que con este sistema, en la Constitución de 1998, nació un sistema de cuota electoral en razón al género.

La anterior disposición regía para las elecciones inmediatamente consecutivas a la promulgación de la Constitución de 1998, razón por la cual se reformó la Ley de Elecciones mediante la Ley No. 2000-1, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 20 de 18 de febrero del 2000. Esta reforma tenía como finalidad de aumentar el porcentaje de participación de género al 30%, tanto en los candidatos principales como suplentes. Este porcentaje se incrementaría en un 5% en cada proceso electoral, hasta llegar a una igualdad representativa (es decir un 50% equitativo para hombres y mujeres) en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución de 1998. Esta norma fue de gran trascendencia, ya que no solo estableció un plazo para alcanzar mencionada igualdad, sino que reconoció (o trató de implementar) el principio de alternancia y secuencialidad, es decir, que existan listas dónde se presente un nombre después de una mujer o una mujer después de un hombre.

Con el principio de alternancia y secuencialidad, el legislador intentó superar lo que consideró un abuso, por parte de varias organizaciones políticas que, en vista de la normativa vigente, solían presentar a las mujeres únicamente entre las últimas candidatas de sus listas, lo cual reducía gravemente la posibilidad de alcanzar un escaño; siendo la excepción, la presencia de candidatas reconocidas en el ambiente político (o social) nacional o si la candidata obtuviere votos individuales sobre los votos en “plancha” de su organización política. Lo anterior originaba que en la composición del órgano, para el cual se organizó la elección pluripersonal, no se visibilizara el porcentaje correspondiente a la cuota de género.

²³ La disposición constitucional solamente afectaba a las elecciones venideras, concluyéndose que mediante la normativa electoral subsiguiente, se debería reglamentar la cuota así como su porcentaje.

Esta reforma a la Ley de Elecciones sancionaba severamente el incumplimiento de la disposición, pues establecía que su incumplimiento acarrearía la invalidez de la lista y por tanto el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales debían negar, de oficio, o a petición de parte, la inscripción de aquella lista.

Sin embargo, se requirió sucesivas reformas al artículo 41 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Elecciones, para alcanzar la paridad de género, y que los principios de alternancia y secuencialidad fueran entendidos en la siguiente fórmula: hombre - mujer o viceversa, con equidad de género entre principales y suplentes²⁴.

Lamentablemente la disposición constitucional que obliga que exista una participación equitativa en la conformación de los partidos políticos, no fue aplicada de conformidad a su finalidad, a tal punto que no se reformó la Ley Orgánica de Partidos Políticos para que se pueda viabilizar su disposición.

Los cambios sociales que han evolucionado con la ciudadanía ecuatoriana, responden a sus distintas costumbres, conocimientos y culturas. Es por eso, que actualmente los derechos políticos, así como el acceso a los mismos, se encuentran en constante evolución y cambio.

1.3.2. Régimen actual para la participación femenina en la Política Ecuatoriana

Principios Constitucionales.-

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador, en el año 2008, se fortalecieron muchos de los avances ya realizados por la Constitución de 1998 y la legislación secundaria en materia de la participación política de la comunidad.

La participación paritaria entre hombres y mujeres en las directivas de las organizaciones políticas, se encuentra muy bien recogida en el artículo 108²⁵ siendo

²⁴Estas reformas fueron emitidas por Resolución No. 1 del Tribunal Supremo Electoral, publicada en Registro Oficial 384 de 23 de Julio del 2004; Resolución No. 5 del Tribunal Supremo Electoral, publicada en Registro Oficial 337 de 18 de Agosto del 2006; y, Resolución No. 7 del Tribunal Supremo Electoral, publicada en Registro Oficial 118 de 3 de Julio del 2007.

²⁵**Constitución de la República del Ecuador.- Art. 108.-** *Los partidos y movimientos políticos son*

que la paridad y alternancia entre hombres y mujeres en las listas para elecciones pluripersonales en el artículo 116²⁶.

Por otro lado en lo que se refiere a la conformación de los órganos de la Función Electoral, la norma constitucional exige de manera expresa²⁷ que se respete el principio de paridad de género. Disposición que fuera acatada por la Asamblea Nacional Constituyente, ya que en la conformación tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral se nombraron a cinco miembros mujeres y cinco varones como titulares y suplentes, en cada uno de estos organismos²⁸.

En el caso específico del Tribunal Contencioso Electoral, en lo que se refiere a la conformación de su pleno como máximo órgano y sus jueces suplentes, actualmente está compuesto por 3 mujeres titulares, dos de las cuales ocupan los cargos de Presidenta y Vicepresidenta; y dos de sus miembros suplentes son también mujeres (año 2011).

Además, de conformidad con lo visitas de campo, se puede apreciar que en caso de sus servidores existe un 60% de miembros mujeres. Esto último se debe a que este organismo es de nueva creación, y gracias a la decidida acción de sus titulares, la composición del Tribunal refleja el mandato constitucional de paridad de género.

La acción del Consejo Nacional Electoral en este sentido fue menos coherente con los mandatos constitucionales, ya que apenas un 25% de mujeres presidieron las Juntas Provinciales Electorales en las elecciones de 2009, pero en general la composición de

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias. (Énfasis agregado)

²⁶**Constitución de la República del Ecuador.- Art. 116.-** *Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país.*

²⁷Véase Artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador

²⁸Véase Mandato Constituyente No. 22, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 458 de 31 de octubre de 2008.

los órganos inferiores de la administración electoral respetó el principio de paridad de género²⁹.

A diferencia de la Constitución de 1998, los derechos, que se generaron a partir de la acción afirmativa por parte de la normativa constitucional, fueron recogidos inmediatamente por la legislación secundaria, de tal manera que mediante la expedición de las normas transitorias para las elecciones de 2009 ya fueron incorporadas como reglas de cumplimiento obligatorio, y con la expedición de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, se ratificaron e incluso se lograron avances adicionales, en torno a la disposición de la alternancia y secuencialidad, haciendo extensivo la temática sobre paridad que solo se recogía para candidaturas pluripersonales, siendo que se exige que las candidaturas para Prefecto y Vice prefecto deban presentarse en binomios de una mujer y un hombre o viceversa³⁰. Además en el caso de empate para el último escaño en elecciones pluripersonales entre un hombre y una mujer, esta última tendrá preferencia en la adjudicación del cargo³¹.

Cabe indicar que a razón de estas disposiciones expresas y reglamentadas, fueron electas tan sólo el 32,26% de mujeres como miembros de la Asamblea Nacional, lo que evidencia que a pesar del establecimiento de estas medidas de acción positiva, aún se requiere que estos principios sean incorporados en la sociedad, para que sean efectivos. Desde luego, una participación más activa por parte de las mujeres también será necesaria para la implementación de las normas.

1.3.3. Igualdad de oportunidades en la participación electoral en el caso ecuatoriano

Para dar una interpretación de lo que se consideraría la igualdad en materia electoral, tenemos que hacer, necesariamente, una derivación o encontrar de donde deviene la igualdad y cuál es su alcance en materia electoral.

²⁹Véase http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/Final_report/FINAL_REPORT_ESPANOL.pdf (visitada en 28 de mayo de 2010)

³⁰Véase Código de la Democracia, artículo 163.

³¹Véase Código de la Democracia, artículo 165.

En el caso ecuatoriano, toda la generación y desarrollo de la igualdad electoral tiene su origen en los principios orgánicos que la legislación consagra.

La Constitución de 2008 genera una particularidad con respecto al reconocimiento de principios y valores, que actúan como normas de optimización de las legislaciones que se acoplarán a ésta, basada en éstos, se trata de dar una armonía en el uso de normas que desarrollan principalmente las funciones inherentes y reconocidas del Estado.

Para el caso de la Función Electoral, se ha reconocido el principio-valor de la *equidad*³² y su aplicación generalizada a todo el sistema electoral y en particular a los procesos electorales que se espera se desarrollen en el país, es decir procesos electorales de cualquier índole, como por ejemplo los que activan a los mecanismos democráticos de carácter participativo.

La igualdad como principio, propiamente dicho, o como adecuación interpretativa del principio de equidad, no solo es una extensión de éste, sino que bien puede ser complementado por otros principios generales que señalados para el sistema electoral y que directamente tienen que ver con la igualdad de género, como en este caso lo sería el principio de alternabilidad de hombre y mujer, de conformidad a lo señalado por el propio Código de la Democracia, en su artículo 4. Esto se da por la muy especial composición de la legislación que regula el ámbito contencioso electoral ya que ésta, por su carácter especial tiene que recoger no solo los principios que hacen referencia a temas electorales y constitucionales, sino principios de la administración de justicia ordinario y de la teoría general del proceso.

En el caso específico de la promoción electoral que propugne una participación igualitaria en razón de género, se han dado varios pasos en las legislaciones a nivel latinoamericano, señalando la propia alternabilidad, como en el caso ecuatoriano, u obligando a cuotas porcentuales de participación de mujeres en las listas para

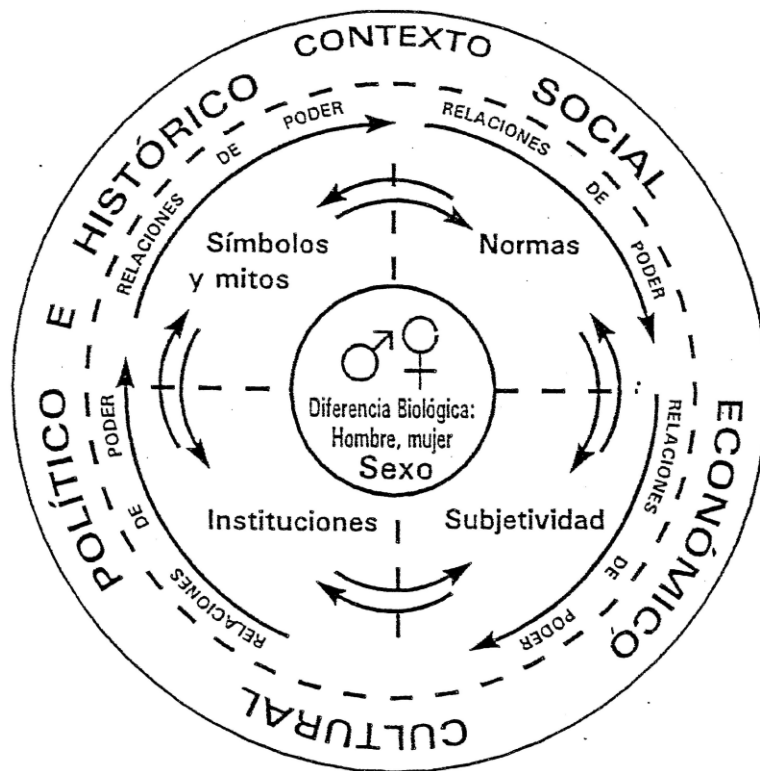
³²En la Ley Orgánica de Elecciones y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, el artículo 4 señala que esta ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: 1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres.

elecciones pluripersonales. Es por esto que la equidad en elecciones, sobre temas de género se relaciona más con el desarrollo del principio de igualdad de participación.

1.3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PARIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTORALES

Para considerar la evolución del concepto de “paridad” en los sistemas electorales, habrá que razonar la diferenciación doctrinaria social que implica la utilización de los términos “sexo” y “género”. El sociólogo Joan SCOTT, en su obra titulada “El Género: una categoría útil para el análisis histórico”³³ establece una oposición radical en las definiciones sobre sexo y género, promoviendo a que sexo, abarque la diferenciación biológica y física que diferencia al hombre con la mujer, siendo que género, implica cuatro campos de acción en relación a las características sociales, culturales, psicológicas, jurídicas e inclusive económicas de acuerdo a: i) la identidad subjetiva, de acuerdo a la constitución síquica del sexo; ii) las instituciones y relaciones sociales, sobre las situaciones familiares, de trabajo y educativas; iii) los símbolos y mitos de la cultura, asociados a la diferenciación psicológica entre hombres y mujeres; y, iv) lo normativo, a través de lo cual se interpretan el significado de los símbolos culturales y se los exterioriza por medio de normas jurídicas y criterios morales así como culturales. Dichos principios, han sido demostrados por SCOTT, en el siguiente cuadro:

³³ SCOTT W., Joan, El Género: una categoría útil para el análisis histórico, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, d/f.



Fuente: SCOTT W., Joan, El Género: una categoría útil para el análisis histórico, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, s/f

En el campo democrático y político, los sistemas electorales son el fruto participativo del desarrollo de la comunidad, su pensamiento democrático, evoluciona y cambia con ellos. Con el transcurso del tiempo de la vida republicana en el Ecuador, la participación social ciudadana ha mutado en conformidad a las necesidades de inclusión política de la nación. Dichas necesidades, que debidamente justificadas y legalmente instruidas, conllevan a un adecuado asentamiento político-representativo del país, provocan que exista una relación simbiótica entre el establecimiento de las cualidades y límites jurídicos de la democracia, y la representación y participación social.

Las normativas jurídicas, son el fundamento tangible sobre el cual los sistemas electorales tienen su funcionamiento. Los procesos creativos de normas y doctrinas electorales, están sujetos a un estricto proceso social, que pueden atraer de manera positiva a distintos grupos sociales, para una inclusión activa en el actuar político de un Estado. De igual manera, si el proceso para la instauración de determinado sistema electoral, no ha sido en conformidad con la realidad política y social del Estado, existe el peligro que la normativa en la que se basa determinado sistema

electoral, no represente a los intereses políticos del país, faltando de manera grave a la democracia y a sus modos de participación ciudadana.

La implantación de un sistema electoral definitivo, ha sido la culminación del reconocimiento o consenso sobre derechos, en los que determinado sector social ha intervenido. En el caso masculino, la búsqueda de la obtención de un sufragio universal (masculino) en los inicios de la instauración de la democracia participativa, fue lenta y a la vez eficaz, pero para la mujer, esa misma lucha ha sido mucho más intensa y ha requerido, de igual manera, de mucho más esfuerzo. La mujer en la sociedad del siglo XIX carecía de la mayoría de derechos fundamentales que los hombres comunes gozaban. Solamente a finales del siglo XIX se desarrolló una conciencia sobre la situación social de la mujer y una idea sobre la generalización del voto y el acceso a la educación. Para la Primera Guerra Mundial, en Europa, se reconoció el derecho al voto del sexo femenino.³⁴ Por su parte, la Iglesia Católica, por medio del Papa Benedicto XV, se pronunció favorablemente a la participación de la mujer en la vida política de una nación, logrando de esa manera extender aún más el sentimiento de igualdad que se buscó a inicios de siglo.

La definición de paridad electoral comienza a fundirse con el reconocimiento otorgado por varios convenios y pactos internacionales que tienen como origen el seno de las Naciones Unidas. Con la aprobación en 1952, del Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer³⁵ en las Naciones Unidas, se buscó establecer las bases del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el campo electoral. Mencionado convenio establece la necesidad de reconocer el derecho de *toda* persona de participar en el gobierno de su país ya sea de forma directa o por representantes libremente escogidos, al igual que el acceso equitativo al servicio público y el disfrute de los derechos políticos por igual entre hombres y mujeres.

De igual manera, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ratificado por el Ecuador en 4 de abril de 1968), establece disposiciones específicas sobre el acceso a cargos y funciones públicas de ambos sexos de manera igualitaria y equitativa ya sea de forma electoral como de otra índole. Por otro lado y con el

³⁴Nueva Zelanda 1893, Australia 1902, Finlandia 1906, Noruega 1913, Dinamarca, 1915, Islandia 1915, Gran Bretaña 1918, Austria 1918. F. Unión Interparlamentaria

³⁵Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952, entrada en vigor: 7 de julio de 1954

mismo enfoque, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Ratificada por Ecuador en 9 de noviembre de 1981) buscó el terminar con las desigualdades sociales que sufría la mujer en su vida cotidiana y aún más en su evolución política, así como, de acuerdo al politólogo Fernando Mora, la introducción de medidas de acción positiva para superar las discriminaciones que afectan a las mujeres.

Desde ese entonces, la búsqueda de equidad política, no ha disminuido, por el contrario, ha empezado a tocar nuevas fronteras. En la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijín, 1995), se estableció como principal objetivo una línea de acción para la representación paritaria, tomando como base a la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo que, la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones constituye una violación a la misma, se establece que toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país. Por su parte, en el Ecuador y como se lo estudiará más adelante, se han instaurado ya sistemas que incorporan nuevos principios e ideologías sobre la participación general de la comunidad. Por su parte en la Plataforma en Beijín, se promulgó la toma de medidas positivas que abarquen a los sistemas electorales para que se aliente a los partidos políticos en el tema de la incorporación de mujeres a los cargos directivos y electivos, de igual forma y en misma proporción que los hombres.

Con la Conferencia Europea de París “Mujeres y Hombres al Poder” celebrada a finales de 1999, se establece a la paridad, como una exigencia democrática, como un principio de igualdad para una sociedad más dinámica y solidaria. La Conferencia, establece “la participación equilibrada en la toma de decisiones es necesaria para la construcción de una Europa más representativa políticamente más dinámica y más solidaria; constituye un factor de cohesión social y responde a la exigencia ciudadana...” “[E]sta seria una primera etapa para conseguir el objetivo compón y prioritario que supone la igualdad en el poder, la paridad...”

Desde la década de los 80, se vienen desarrollando en Europa y América políticas positivas hacia la igualdad social de la mujer. De forma concreta, el Partido Socialista Obrero Español, se convirtió en pionero, al aprobar en su 31 Congreso, en 1988, una cuota obligatoria del 25% de mujeres para sus listas de candidatos en

elecciones. El mismo partido, para su Congreso 34, aprueba la autodenominada, “Democracia partidaria” en una representación igualitaria entre hombres y mujeres. Posteriormente, en el año 2000, el programa electoral español, adquiere la necesidad de hacerlo extensivo a la sociedad, proponiendo una reforma legislativa en el campo electoral.

1.4.1. El hombre y la mujer en las democracias modernas.

En conformidad con la Dra. María Macías Jara, la preocupación por el reconocimiento jurídico de la igualdad y por la garantía de su consecución efectiva, no es una cuestión novedosa ni contemporánea³⁶. Con la modernización democrática que ha sufrido el hombre y la mujer en el entorno social, cada vez las divisiones por género en la vida cotidiana, se hacen más cortas. Pero en la realidad del derecho electoral, se puede apreciar un entorno diferente. Si bien, como electores, es indudable que exista diferencia alguna.³⁷ En la situación de los candidatos o candidatas, la realidad es distinta. Quedaría como interrogante, objeto de este estudio, si las condiciones actuales para la mujer y el hombre permiten una integración común y general en la búsqueda de una representación universal y equitativa.

No obstante, a partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, y la generación del criterio sobre la igualdad legal de las mujeres, así como el reconocimiento de las minorías, en muchos países occidentales y no musulmanes, se establece una igualdad legal entre hombre y mujer, existiendo por cierto, muchos casos donde esta igualdad fue simplemente de manera teórica³⁸. Sin embargo, desde los años 50 se podría concluir que el papel femenino en la sociedad, a nivel mundial, ha sufrido un cambio esperado y buscado por sus miembros.

Las democracias modernas o los regímenes democráticos modernos, han implementado en sus políticas de estado, la búsqueda de una participación más intensa de la mujer en las pugnas políticas. Ya sea por representación en sexo o por equilibrio social en género, la normativa electoral se encuentra en cambio. En varios

³⁶ MACIAS JARA María, Democracia Representativa Paritaria. Instituto de Filosofía CSIC. Revista Virtual 2007. www.ifs.csic.es/postgrad/jurilog/mayo07.pd

³⁷ La Constitución Ecuatoriana, en su Artículo 62, establece el principio de Igualdad (el voto de cada persona es igual).

³⁸ Son muchos los casos donde se permite a las mujeres el derecho al voto, pero solo algunas tenían acceso o estaban capacitadas para hacerlo. EL movimiento feminista que estableció el sufragio femenino en Uruguay en 1917, recién en 1927 pudo ejercer su derecho.

países de Latinoamérica, se incita a una nueva forma de representación democrática inspirada en la evolución ciudadana que necesita y exige una representación de sexo igualitaria. La mujer en las democracias modernas, se ha convertido en un motor de cambio y evolución. Por su lado, el hombre ha transferido sus puestos de poder convencionales (bajo la presión ciudadana) a manos de nuevas caras y nuevas políticas igualitarias.

1.4.2. La paridad y la democracia.

La paridad, a decir de Elena Simón Rodríguez, es un valor político de contrapeso de la igualdad, aunque, su explicación radica mejor, en el analizar el término matemático de la “equidiferencia”, el cual es definido como la *“igualdad de dos razones por la diferencia”*³⁹. Si se refiere a la paridad como a la proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres, se aplica como calificativo, la “Democracia paritaria”, que se remite a los porcentajes y cuotas de presencia estadística de mujeres en sectores donde se hallan sub-representadas por lo tanto, se da nacimiento a la lucha por la discriminación positiva para el conseguir espacios laborales o políticos, donde como mujer es difícil ingresar por méritos propios, debido a la ocupación excesiva de hombres⁴⁰.

En el campo electoral, tomando en consideración el inicio semántico de la palabra paridad, el vocablo *“par”* refiere que paridad no es solamente una representación estadística del acceso de la mujer a espacios políticos de decisión, sino, va más allá; *“par”* es definido como semejante, simétrico, igual, conjunto de dos, fuerzas iguales y paralelas⁴¹. Por lo tanto, es necesario ahondar más en el sentido de la proporción, equilibrio e igualdad que en el sentido estadístico y numerológico, con el objetivo final de implantar una participación general que, a últimas instancias, será lo justo en el ámbito electoral.

Por su lado, la democracia representativa, busca justicia social así como la igualdad política, por medio de la inclusión a todos los seres capaces de sufragar en una sociedad. Aristóteles, interrelacionando la igualdad con justicia estableció *“que la igualdad es lo justo y, ciertamente lo es, pero no para todos, sino para los*

³⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua,

⁴⁰ SIMÓN RODRÍGUEZ, María Elena, Democracia Vital, Editorial ANAGRAMA, Madrid, 1999, pág. 160

⁴¹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua

*desiguales*⁴². Subsecuentemente, la falta de igualdad y justicia, se encuentra presente cuando la sociedad en su conglomerado, no tiene las mismas condiciones individuales para su desenvolvimiento. Así pues, una democracia paritaria, viene a ser la evolución de la democracia representativa⁴³ y de forma más profunda, la democracia paritaria es una democracia representativa completa⁴⁴. De manera tal que en una democracia paritaria, tanto mujeres como hombres, han de ser partícipes de los altos cargos políticos en la defensa de sus propios intereses, siendo que sus derechos no quedan en manos ajenas a las propias.⁴⁵ Sentimientos que cabe señalar, son los que impulsaron la ya mencionada Revolución Francesa.

1.4.2.1. Equilibrio en la representación política.

La Representación, es entendida como el acto mediante el cual un Representante, ya sea un legislador o un gobernante, actúa a instancias del Representado, en razón del cumplimiento de las necesidades de éste y de acuerdo a las normas de representación, el representado, podrá controlar la actividad del representante por medio de elecciones periódicas. Ahora, ¿Es necesario un equilibrio en la representación política? Pues, en la actualidad, cualquier equilibrio en la vida política de un estado es necesario y adecuado; más aún dentro de nuestro campo de estudio a razón que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como lo señala Macías Jara, está construida sobre pilares muy poco sólidos, más cercanos a una igualdad ficticia que a la igualdad real,⁴⁶ el movimiento democrático reclama la representación igualitaria de todos los sectores de la sociedad, entre electores y electos, la existencia de un equilibrio en la representación política es necesaria en vista del contexto histórico sobre los sectores liberales donde se construyó ideológicamente el Estado Social de Derecho, en los cuales, aunque se promulgó la igualdad de clases, se deslindó a la mujer de una responsabilidad política y sobre ella se gobernó para ella.⁴⁷

Grupos de derechos políticos europeos, han instigado a la comunidad civil a que se tome conciencia sobre las diferencias de sexo y de género existentes entre hombres y

⁴² ARISTÓTELES, Política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, pág. 83

⁴³ SOLSONA i PIÑOL, C, “Paridad democrática”, en SAAVEDRA RUIZ, P. (Intro), *La democracia paritaria en la construcción europea*, CELEM, 2000, pág. 134

⁴⁴ MACIAS JARA María, Democracia Representativa Paritaria. Instituto de Filosofía CSIC. Revista Virtual 2007. www.ifs.csic.es/postgrad/jurilog/mayo07.pdf

⁴⁵ ASTELARRA, J., *Las mujeres podemos: otra visión política*, Icaria, Barcelona, 1986, pág. 65.

⁴⁶ MACIAS JARA María, Democracia Representativa Paritaria. Instituto de Filosofía CSIC. Revista Virtual 2007. www.ifs.csic.es/postgrad/jurilog/mayo07.pdf

⁴⁷ REVOLUCIÓN FRANCESA

mujeres, instruyendo de la necesidad de contar con una representación equitativa y equilibrada de ambos.

Cabría insistir en que la búsqueda de un equilibrio en la representación política, no solamente debe radicar en el campo de género, sino donde la comunidad necesite representación, pudiendo ésta entenderse inclusive en el campo industrial, educativo, cultural o recreacional.

En conformidad con García Pelayo y siguiendo el ideal russoniano de la delegación de la soberanía, *"re-presentar, en su genuino y general sentido, significa dar presencia a algo que está ausente, convertir en entidad actuante a algo que por sí mismo es incapaz de actuar, dar realidad existencial a aquello que por sí mismo no puede realizar ciertos actos de existencia"*⁴⁸ por lo cual, se entiende que se la comunidad, aunque soberana y con poder comunitario, en sí es incapaz de realizar acto alguno, si no tiene de por medio entes que la representen. No podría existir una sociedad actuante por sus derechos, sin la existencia de un Parlamento o Congreso que busque su bienestar. Entendido para efectos de este trabajo, ¿Podría existir entonces, una búsqueda de igualdad en derechos, sin la representación general y equitativa de la comunidad?

No es novedosa la discusión de la participación y lucha femenina por el equilibrio en la representación política. Más bien, es ancestral y centrada en la imposibilidad de los gobernantes para gobernar por unos y por otros, a base de la experiencia de las vivencias y cualidades de un grupo social determinado, inclusive, en la época colonial, tomando en consideración los principios filosóficos de la Revolución Francesa, dónde en las decisiones de los padres de nuestro actual Estado Social de Derecho, desconocieron sus derechos como seres humanos, preguntándose sobre las posibilidades de los hombres en gobernar positivamente a las mujeres.

Si Sartori⁴⁹ y sus diferentes perspectivas de representación social, las que establecen una representación jurídica, sociológica y política; para lo cual define como representación sociológica, a aquella en la que el representado, como un espejo, se refleja en su representante y busca, debido a una común identidad, clase social,

⁴⁸ GARCÍA PELAYO, M. **Las funciones de los modernos parlamentos bicamerales**, Caracas, Congreso de la República, 1971

⁴⁹ SARTORI, Giovanni. "Representación", en G. Sartori, **Elementos de ciencia política**, Barcelona, Ariel 1986

territorio u ideología que, se defiendan sus necesidades e intereses, establece una definición tan amplia y general que acoge a aspectos tan simbólicos y determinantes en la vida de un ser humano. Sería impensable que se pueda relegar al sexo de una persona, como un aspecto que limite a la representación equilibrada e igualitaria en género de una sociedad.

CAPÍTULO 2

2. CUOTAS ELECTORALES Y LIBERTAD DE ELECCIÓN

2.1. DISCRIMINACIÓN Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL

La discriminación electoral, se encuentra ligada en su definición y alcance a la participación electoral, por lo que, es necesario partir de ese principio para poder ampliar su estudio. Sobre participación electoral, la autora Pippa NORRIS, destaca:.

“La participación electoral es uno de los indicadores más comunes usados para calibrar la salud de la democracia”⁵⁰.

Si bien es cierto que esta consideración es válida para las democracias consolidadas, y además posee un especial interés para casos como el del Ecuador, en el mismo sentido, y refiriéndose también a las democracias emergentes, NORRIS dice:

*“Es importante analizar la participación ciudadana porque el proceso de consolidación requiere de una amplia aceptación de las “reglas del juego” democrático en toda la sociedad, de tal manera que las instituciones democráticas se arraiguen profundamente en la cultura y adquieran así una mayor resistencia a las amenazas de desestabilización y los cuestionamientos populistas”.*⁵¹

La transformación actual y continua de los gobiernos de América Latina son plausibles en vista que la simple representación, significa democracia en los casos donde ésta posee un carácter emergente.

“Hay quienes han dibujado un panorama lúgubre de las tendencias en años recientes y sugieren que el optimismo exagerado sobre las consecuencias de la democracia, común hace apenas una década en América Latina, se ha desvanecido desde entonces para ser sustituido por señales de una paulatina desilusión pública hacia la democracia,

⁵⁰ NORRIS Pippa, “La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa” Educación Pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2002 Pg. 64

⁵¹ NORRIS Pippa, Op cit. Pg. 64

impulsada en buena parte, según sugieren algunos, por el deterioro de la economía.”⁵²

NORRIS sostiene que las tesis acerca de la viabilidad estratégica de las democracias emergentes, y específicamente las latinoamericanas, requieren análisis comparativos minuciosos; recomendando en particular diseñar estrategias de investigación que permitan observar **tanto la conducta como la actitud** de los integrantes de las democracias.

La importancia del analizar la participación electoral radica en que el votar representa el derecho elemental de cada ciudadano a participar en política y, al mismo tiempo, abriga los dos principios básicos de la Democracia: universalidad e igualdad.

Sin embargo, votar no es la única y ni la más efectiva forma de participar en política, siendo que el sufragio es una forma de participación que demanda un mínimo de esfuerzo y no envuelve conflicto alguno, tiene la desventaja de no impactar significativamente en el contenido de las políticas y no generar beneficios tangibles e inmediatos para el elector

De acuerdo al profesor de ciencia política Bringham Powell, las variaciones en participación electoral, son explicadas por las siguientes razones:

Facilidades legales para votar: De acuerdo a un estudio comparativo de sobre participación electoral se demuestra que en las democracias dónde votar es obligatorio la participación política de la sociedad es superior que en los países donde no lo es.⁵³

Incentivos administrativos: Existen incentivos administrativos para que la gente sufrague. En algunos países, como Italia, se han tomado cuidados extremos para que les convenga votar a los ciudadanos: las casillas de votación se abren por dos días, el día de la elección es festivo y se hacen rebajas en las tarifas de los boletos de tren para aquellos que tengan que trasladarse a sus recintos electorales para poder votar. Aspectos que explican los altos niveles de participación electoral que posee Italia en un porcentaje del 93%.⁵⁴

⁵² NORRIS Pippa., Op cit. Pg. 65

⁵³ POWELL, Bingham Jr. (1980), "Voting Turnout in Thirty Democracies: Partisan, Legal, And Socio-Economic Influences" in Richard Rose, *Electoral Participation A Comparative Analysis*. SAGE Publications. Traducción.

⁵⁴ Op cit.

En otros países se puede votar de forma adelantada por correo y/o se colocan recintos especiales de votación en hospitales, casas de asilo y embajadas.

Sin embargo, existe un factor que contrarresta los incentivos ya mencionados: las leyes de registro. Como menciona Powell, si los ciudadanos se tienen que registrar para poder votar, el voto se convierte en un acto más costoso, ya que tienen que hacer el doble esfuerzo de ir a registrarse y posteriormente ir a votar.

Así ya que registrarse toma tiempo por lo que se esperaría mayor participación en los países con registro automático. De hecho, se ha estimado que la participación en Estados Unidos sería 10 por ciento más alta si el registro fuera automático.

Siendo el Ecuador, un país donde el voto es obligatorio, la sociedad no goza de incentivos para acudir a sufragar. En las embajadas y consulados ecuatorianos se han diseñado sistemas que permiten al ciudadano en el exterior el poder decidir por su gobierno, sistemas que aunque burocráticos y eternos, han permitido que las comunidades en el extranjero, se pronuncien sobre situaciones políticas en el país.

2.1.1 Comportamiento electoral

Desde el punto de vista del comportamiento electoral, las diferencias en participación dependen de las capacidades y los recursos con los que cuentan los votantes.

El comportamiento electoral responde a los cuestionamientos del porqué algunas personas votan y otras no (o anulan su voto si lo hacen), así como también el porqué algunos individuos votan por un partido y no por otro.

El concepto del comportamiento electoral se origina en múltiples disciplinas (antropología, sociología, psicología social y ciencia política), lo que resultó en el desarrollo doctrinario de tres teorías sobre el comportamiento electoral: la sociológica, la psicológica y la racional.

La teoría sociología-política se concentra principalmente en las bases grupales del voto: clase social, religión y edad. En sus orígenes, esta teoría asumía que una persona piensa políticamente tal y como es socialmente. Actualmente considera que las características sociales son importantes, no porque se trasladan directamente a un grupo de preferencias e intereses, sino porque colocan a los individuos en un contexto social que afecta su entendimiento sobre la información política y por lo tanto, restringe las interacciones sociales de los individuos.

Existen algunas características sociales de las personas que están fuertemente ligadas con niveles altos de participación electoral.

Estas características son: altos niveles de ingreso y educación, género masculino y edad madura. La explicación social de la participación electoral puede resumirse en dos vertientes. Una es el estatus social: las personas con estatus social alto tienen el tiempo, la información, el conocimiento y el dinero para involucrarse en política ⁵⁵.

La otra explicación es la del ciclo de vida: la gente joven está menos interesada en la política, pero cuando se establecen y toman algunas responsabilidades sociales su motivación por la participación política generalmente aumenta.

Sin embargo, para Denver, citado por Dalton, no es la edad en sí lo que explica la participación electoral o política, sino las condiciones ambientales y culturales de la sociedad, la inclusión e importancia por cierta resolución política, se logra por medio de mecanismos de atracción instaurados en los sistemas educativos de cada país.⁵⁶

De acuerdo con la teoría psicológica, el comportamiento político de los individuos se explica por el sentimiento de identificación con un partido político que desarrollan los votantes.

⁵⁵DALTON, Russell , *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Western Democracies* London: Chatham House. Traducción. 2006. Pg. 102 a 104,resumen.

⁵⁶ Citado por: DALTON, Russell 2006

La identidad partidista es un proceso de socialización que frecuentemente se origina dentro de la familia y posteriormente, en la vida adulta. Este ámbito, define la necesidad de votar e inclusive, define por qué partido hacerlo.

*“La afinidad partidista juega el papel de estructura normativa que define lo bueno, lo malo, lo aceptable e inaceptable del mundo político”.*⁵⁷

De manera general, aquellos ciudadanos que han creado lazos fuertes con algún partido político suelen participar más que aquellos que no sienten afinidad partidista alguna.

La teoría sobre la perspectiva racional, es el concepto que explica la racionalidad de las personas para entender su participación electoral. Para la teoría racional los votantes valoran tanto los costos como los beneficios de votar, así como la probabilidad de afectar los resultados de la elección. Los costos de la votación son registrarse e ir a la casilla a votar.

Los beneficios que los votantes quieren recibir se relacionan con la comparación de las utilidades que el ciudadano espera obtener por parte de cada uno de los partidos participantes cuando se encuentren gobernando. La posibilidad de afectar los resultados depende de que tan competitivos el criterio del elector sobre la elección y cuántos otros ciudadanos espera que voten.

Así en su decisión entre votar y no, el elector considerará si los beneficios que recibirá del partido que ha escogido son mayores que los costos en que incurrirá.

Para Anthony Downs, citado por Dalton, el acto de votar es racional pero no egoísta. En su modelo el ciudadano recibe beneficios del acto de votar en sí: el beneficio de vivir en democracia. Por lo tanto, es irrelevante que ese voto tenga un efecto insignificante; uno irá a votar si las ganancias de mantener a un sistema democrático sano son más importantes que el costo de votar⁵⁸.

⁵⁷DALTON, Russell 2006. pg. 104

⁵⁸Citado por: Dalton, Russell 2006.

La valoración de la democracia también es un indicador que hace la diferencia en la participación electoral

Las tres teorías revisadas anteriormente sobre el comportamiento electoral, coinciden en la definición de un modelo de votante más real, una persona común que decide de acuerdo a sus propias metas, necesidades y valores, pero sin estar completamente informado e influido por su entorno social y económico.

El ciudadano común puede reconocer los costos y beneficios de votar, y puede guiarse por su afinidad partidista.

2.1.1. Discriminación Electoral.

La discriminación electoral es una de las formas de exclusión en la toma de decisiones de un Estado, que fue aplicada de manera común en el pasado. Actualmente, la discriminación Electoral, al menos en los países de América Latina y sobre todo en el Ecuador, jurídicamente, ha desaparecido. Mediante la publicación de normas que establecen el voto universal para toda persona adulta, o como en algunos casos especiales, para menores de edad que han superado un límite de edad⁵⁹, el sufragio es común para cualquier ciudadano.

Aunque existen ciertas tendencias e ideologías electorales, que reconocen al Estado como la unidad política básica y por lo tanto se permite el voto sólo a quienes se considera ciudadanos de ese Estado, estableciendo una exclusión a sus no nacionales, en el Ecuador, con la aprobación de la Constitución Política de 2008, en el Artículo 63, se estableció el derecho al sufragio de los extranjeros, aunque con ciertas limitaciones.⁶⁰ Por su parte la Unión Europea establece un voto para instituciones internacionales, tales como el Parlamento Europeo, aunque existe una limitación determinada por cada Estado Miembro hacia sus ciudadanos.

⁵⁹ Cabe recalcar que la inclusión del Artículo 62 de la Constitución Ecuatoriana del 2008, habla de una capacidad para elegir (votar) de las personas mayores de 16 años y menores a 18 años, la cual es facultativa (no obligatoria) para el que va a ejercer su derecho.

⁶⁰ El Art. 63, señala que los extranjeros y extranjeras residentes en el Ecuador, tienen derecho al voto, siempre y cuando hayan residido legalmente por más de cinco años en el País.

La ciudadanía, requisito principal y en muchos casos único para ejercer el derecho al sufragio, se concede básicamente de acuerdo a los principios jurídicos por territorio de nacimiento (*Ius soli*) y por la ascendencia (*Ius sanguinis*), además de ciertas normas por las cuales se puede obtener la ciudadanía por residencia de acuerdo a la ley de cada Estado. El impedir el sufragio por cuestiones de ciudadanía, no será una violación a la discriminación electoral, siempre y cuando, no se deba a razones de origen civil, de sexo o religión sino, por razones de procedencia (ciudadano vs. extranjero)

2.1.2.1. Discriminación Positiva.

a) Acciones afirmativas o positivas

Fernando Rey Martínez, establece en su obra sobre la Discriminación positiva de las mujeres, que: *“Las medidas de acción positiva son aquellas que a través de una diferenciación positiva buscan alcanzar la igualdad efectiva de ciertos colectivos identificados por los rasgos contenidos en las cláusulas específicas de no discriminación, al existir una probada discriminación en la sociedad contra ellos”*⁶¹. Énfasis agregado

Medidas que deben ser estrictamente temporales de conformidad con la evolución en el tiempo y cultura de la aceptación y participación activa de sector humano beneficiado con la discriminación positiva. Por su parte, en el País, las cuotas de participación electoral, como acciones de discriminación afirmativa, son medidas de discriminación inversa, pues su objetivo principal es el reservar a personas de un grupo determinado su inclusión en las listas de candidatos para ocupar puestos de gobierno de elección popular.

Así para la autora, Marta Suplecy, las acciones afirmativas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen

⁶¹ Fernando REY MARTÍNEZ, “La discriminación positiva de mujeres (comentario a propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de 17 de octubre de 1995, asunto Kalanke)”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, n° 47.

carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla.⁶²

*"Históricamente esta expresión fue empleada por primera vez en la Orden ejecutiva núm. 10975, firmada por el presidente Kennedy en 1961 para compensar los efectos de la discriminación histórica contra la población negra estadounidense. Décadas después, los Estados miembros de la Comunidad Europea han llamado "acciones positivas" a medidas de esta naturaleza"*⁶³

Las acciones positivas se pueden desarrollar en diversas áreas de la competencia estatal, las instituciones y las organizaciones públicas: laboral, sindical, educativo, político, etc.

Estas acciones buscan corregir una amplia gama de discriminaciones sean estas raciales, étnicas, de género, grupos de edad; y cualquier otra acción positiva que busque reivindicar la condición humana –el derecho a ser igualmente libres y dignos– de sus integrantes. En última instancia, las acciones positivas son estrategias destinadas a ampliar y profundizar la democracia existente.

La aplicación más común sobre las acciones afirmativas (o positivas) se encuentra en el campo de las estrategias para reducir hasta eliminar la discriminación de las mujeres en la política formal.

Es de dominio común que, de conformidad con los registros históricos, en la mayoría de países, los partidos y las organizaciones que compiten por ejercer y compartir el poder público y político del Estado son hombres. Así también, de manera accesoria, se puede mencionar que en las Fuerzas Armadas, las jerarquías en la Iglesia Católica y las cúpulas del sector financiero están manejadas, en su mayoría por integrantes masculinos.

⁶² Martha Suplecy, 1996; 4-1; p.131 citado por REY MARTÍNEZ, Fernando (2005).

⁶³ Cappellin, 1996; 4-1; p. 158 citado POR: REY MARTÍNEZ, Fernando (2005): *El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo*. MacGraw-Hill. Madrid. Pg. 49

Estos cuatro espacios institucionales ya mencionados son los que mas resistencia han ofrecido para permitir el acceso de las mujeres en los cargos de dirección y responsabilidad.

b) Concepto de discriminación positiva

“La discriminación positiva es una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad de equilibrar su situación de mayor desventaja social.”⁶⁴

La discriminación positiva significa que hay una excepción al principio de igualdad, contemplada en el actual marco legislativo; esto es: *“tratar con desigualdad lo que de partida tiene una situación desigual”*. La ideología detrás de un trato discriminatorio intencional debidamente normado, estima que la igualdad vendrá de la aplicación de principios desigualitarios. Por lo tanto, una vez establecida la igualdad, la discriminación tendría que ser derogada.

Un ejemplo simple y ampliado de discriminación positiva, se puede extraer de las facilidades que se otorgan a una mujer, cuando se encuentra embarazada, para poder obtener un puesto de parqueo en un centro comercial, siendo que, estas situaciones podrían provocar a que se cuestione de si esta práctica es justa o si está de cierta forma cuarteando la igualdad.

La base de la discriminación positiva consiste en que para erradicar las discriminaciones que cierto sector social ha vivido o que por tales discriminaciones, determinado grupo humano se vea limitado en sus derechos, se deben conceder determinadas ayudas hasta que se equiparen a los privilegiados.

Algunas comunidades de opinión entienden comprenden lo correcto sobre el conceder un beneficio a favor del más débil, en razón social mas no en capacidad intelectual. Siendo que actualmente la mujer se encuentra en situaciones de irrespeto en sectores de trabajo, otros entes sociales estimas que la solución no se encuentra en el limitar a los que sí pueden acceder por méritos a determinado cargo o puesto, sino propender a la creación de procesos de selección adecuados, las diferencias de raza o sexo y

⁶⁴ JIMENEZ, David. Discriminación positiva, acción polémica. Editorial Lo blank. Valencia. Pg., 117

religión sea irrelevante, tomando como punto de partida la determinación del ser que se encuentra más capacitado para el cargo.

*“Hay autores que consideran que la discriminación positiva no deja de ser una discriminación, y lo que es más grave, una discriminación legalizada por el estado, consentida y promovida por quien debiera ser garante de nuestros derechos constitucionales y no conculcador de los mismos.”*⁶⁵

El criterio sobre el que nace la no discriminación por sexo y género, radica en que la capacidad y las aptitudes de cada individuo deben estar por encima del sexo siendo que se podrán crear normas discriminatorias que pueden perjudicar de futuras leyes que afecten los derechos fundamentales de la comunidad.

2.1.2.1.1. Efectos de la Discriminación Positiva.

La adopción de la cuota femenina en muchos regímenes democráticos ha sido motivo de debate entre quienes están a favor o en contra del mecanismo.

Los que apoyan la cuota femenina señalan que este mecanismo *"permite aumentar rápidamente el número de mujeres políticas"*⁶⁶ compensando *"la ausencia de mujeres en las funciones electivas y en los puestos de responsabilidad política"*⁶⁷ y contribuyendo *"a formar una masa crítica de mujeres en la rama legislativa que adquiera experiencia política"* y elimine *"el escepticismo sobre su capacidad para ocupar los puestos públicos de manera competitiva"*⁶⁸

Se ha podido evidenciar que en los países donde se implementan cuotas de candidaturas femeninas, tiende a aumentar la participación política de la mujer. Sin embargo no basta la implementación de una cuota para garantizar el impulso del liderazgo político de la mujer, en vista de los posibles efectos desiguales que puede producir la aplicación de esta, por lo que es imperioso que se abarquen otras medidas auxiliares que contengan al sistema de partidos, e incentiven la formación y empoderamiento de las mujeres que optan por el poder político del Estado así como la configuración de un sistema electoral asequible.

⁶⁵REY MARTÍNEZ, Fernando *El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo*. MacGraw-Hill. Madrid 2005. Pg. 49

⁶⁶URIARTE, EDURNE y ELIZONDO, Arantxa. "Mujeres en Política" Ariel. Barcelona 1997, Pág. 106

⁶⁷Op. Cit. pág. 65

⁶⁸Citados por: REY MARTÍNEZ, Fernando. Op. Cit. Pg. 53

Conforme lo señala José Ángel Aquino, los porcentajes de candidaturas no garantizan una mayor elección de mujeres⁶⁹, debido a que se depende directamente de varios elementos de los procedimientos políticos-electorales,

En el país, existieron muchos ejemplos en los que las organizaciones políticas cumplieron con la cuota de mujeres, pero las ubicaciones de las mismas en las listas definitivas del partido, impedían su elección. Con las reformas establecidas por la Constitución del 2008 y el “Código de la Democracia” estudiadas en este trabajo, se establecen cambios que impiden tales actuaciones en la presentación de listas para elecciones pluripersonales.

Una circunstancia a favor de la creación de una cuota para los procesos políticos y las organizaciones políticas, es la creación de efectos anexos dentro del sistema político, ya que, los partidos, movimientos y demás entes políticos comienzan buscar sus candidatas y más mujeres se animan a presentarse como tales. De igual manera, avanzan a puestos de dirección interna y se les da un mayor acceso a la promoción pública y los medios de comunicación.

2.1.3. Acceso a una política participativa.

2.1.3.1. Igualdad de participación por género.

La igualdad ante la ley de hombres y mujeres constituye un principio jurídico y un pilar fundamental de los Estados modernos.

La igualdad jurídica de mujeres y hombres parte de la premisa de que la asignación igual de los derechos fundamentales para todas las personas elimina los obstáculos para que cada individuo desarrolle sus capacidades en las distintas esferas de la vida. Bajo este supuesto el sufragio sería concebido como un derecho cuyo gozo es igual para toda la comunidad, es de acceso equitativo para mujeres y hombres, siendo que al ser un derecho universal, no podrá distinguir entre las diferencias individuales o colectivas, así como las desigualdades en términos de riqueza, estatus y poder.

⁶⁹ José Ángel Aquino, Cuota Femenina, Circunscripciones Electorales y Listas de Candidaturas, Editora Búho, 2004, Rep. Dominicana, pp.. 57

La política es uno de los ámbitos en el que se expresa muy claramente la situación de desigualdad existente entre mujeres y hombres. La estructura política (no jurídica sino social) ha restringido el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones, determinantes en la definición del interés colectivo de la sociedad.

Las desigualdades sobre la participación femenina están vigentes si tomamos en consideración la participación política muy a pesar del establecimiento del principio de igualdad de las personas ante la ley, aspecto que se constituye en un problema central de las democracias actuales.

Históricamente, y como ya ha sido antes referido, las bases de la desigualdad en la participación política de las mujeres tienen su punto de origen, en los criterios marcados en las constituciones, doctrinas y normativas surgidas en la Ilustración, movimiento político- filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos⁷⁰.

La Ilustración, no permitió la participación de mujeres en el **pacto social** para la creación del Estado Social de Derecho, de tal manera que la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* (1789) no consideró la inclusión de mujeres como titulares de derechos, negando inclusive la categoría de la ciudadanía y, por ende, los derechos inherentes a dicha condición.

Cabe destacar que el reconocimiento del derecho al sufragio femenino no fue suficiente para abolir la exclusión de las mujeres en los espacios de poder político. En última instancia, este derecho se ha constituido como condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

El derecho al sufragio ha permitido e impulsado a las mujeres para una participación en la política activa, sin embargo le ha costado mucho el revertir las condiciones

⁷⁰SÁNCHEZ, en Beltrán y Maquieira, 2001:17, citado por: BARREZUETA. María de los Ángeles. Tratamiento discriminatorio. Pg. 29

sociales preestablecidas sobre la posición de género, que aquejan a la sociedad, siendo que:

“...es sumamente grave, no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto, toda vez que la ciudadanía es la cualidad que hace posible que las personas se conviertan en sujetos políticos, responsables de los proyectos colectivos de la sociedad, al tiempo que guarda un vínculo intrínseco con los derechos reconocidos por el Estado y su ejercicio, además de aludir a la pertenencia a una red de organizaciones colectivas –partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones civiles, etcétera”⁷¹

En conclusión, si bien la implementación del sufragio universal no ha logrado eliminar de forma total la impuesta mayoría masculina en las instituciones que conforman el Estado, las reformas normativas en el campo electoral y constitucional, han impulsado la eliminación de limitantes a la participación de las mujeres que impidan ejercer un poder político.

2.1.3.2. Situación en América Latina

En América Latina, durante los primeros años de la década de los noventa algunos movimientos políticos adoptaron medidas similares sobre la inclusión femenina, para los cargos de dirección y las candidaturas a las cámaras legislativas: en Brasil, el Partido dos Trabalhadores (30 por ciento); en México, el Partido de la Revolución Democrática (30 por ciento); el Partido Socialista de Chile (20 por ciento); en Argentina, la ley exige la presencia de 30 por ciento de mujeres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, aunque no del Senado.⁷²

Históricamente las organizaciones socialdemócratas y de izquierda han incitado la transformación.⁷³

⁷¹ BARREZUETA, María de los Ángeles. Tratamiento discriminatorio. Pg. 33

⁷² Datos tomados de: **La situación de la mujer en la toma de decisiones**". Isabel Peleteiro/Antonio Gimeno. Instituto de la Mujer 1999. España

⁷³ BAREIRO, Line; SOTO, Clyde (eds.): *Sola no basta. Mecanismos para mejorar la participación política de las mujeres*, Asunción: FES / CDE, 2007, 92 p

Muchos gobiernos han promulgado leyes que incitan u obligan a establecer mecanismos para el acceso efectivo de la mujer en sus campos de dirección política.

Los sistemas electorales con criterios inclusivos cambian de acuerdo a los gobiernos o estados que los implementan, siendo de mayor facilidad, el establecimiento de los mismos en las candidaturas plurinominales, siendo que de igual manera, para los procesos dónde se requiera elegir a un solo candidato, se regula, de acuerdo a paridad, la suplencia.

Cabe mencionar que la implementación de los sistemas de cuotas han incrementado la presencia femenina en los órganos legislativos o cuerpos colegiados de los países que las han instaurado, permitiendo nuevos criterios sobre los elementos necesarios para competir por cargos de elección pública.

Es imperioso establecer que la conformación de cuotas o la búsqueda de participación de minorías y grupos alejados del poder político, requiere de una concientización cultural y preparación de candidatos o candidatas acordes con las necesidades nacionales

2.1.3. La libertad de elección y sus límites normativos.

2.1.3.1. Distribución reglada de candidatos y su incidencia en la libre elección.

En un sistema electoral, la creación de cuotas en la presentación de candidaturas para el manejo de elecciones pluripersonales influye directamente en la participación política, es por tanto que esta creación, se concentra en un aspecto que debe ser regulado jurídicamente mediante la aplicación de leyes electorales o reglamentos de organizaciones políticas. Siendo de obligación de los sujetos políticos, el aplicar los mecanismos necesarios para propiciar y tender a que se cumplan los principios para los cuales se crearon o se aplicaron las normas de cuotas.

El sistema de las cuotas electorales, establece una cantidad de cargos de ocupación obligatoria por un grupo predeterminado que, en el momento de la elección o creación de la norma se encuentra en una situación de desventaja o discriminación. Existen

varias maneras de aplicar el mecanismo de cuotas, siendo estas establecidas como mínimos o máximos de participación por sexos, siendo que para la aplicación de medidas que incentiven el acceso de mujeres, se instauraran mínimos obligatorios con mecanismos máximos para ambos sexos.

Medidas de acción afirmativa en Ecuador

La finalidad de sistemas de cuotas electorales, se fundamenta en los antecedentes sociales de las historia hombres sobre los cargos de elección popular, en la cual se excluyó inmediatamente a las mujeres, previendo que solo el hombre puede o pudo gobernar tanto para los de su “especie” como para mujeres, es por tal razón que es menester implementar medidas de discriminación positiva como un sistema de cuotas en el que se proteja y garantice una numero mínimo de presentación o representación femenina para procesos pluripersonales.⁷⁴

De conformidad por un estudio realizado por el Tribunal Constitucional del Ecuador, la Doctora Tania Arias Manzano, establece que en el Ecuador, con las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones realizadas en el año 2000, se aplicaron a las listas de candidaturas pluripersonales, las cuales establecieron, un porcentaje obligatorio de participación de mujeres como candidatas, incorporándose este sistema a través de la llamada ley de cuotas y que además incluyó los principios de alternabilidad y secuencialidad⁷⁵. Siendo esta la norma predecesora que facultó para que hoy en día, se cuente con una norma expresada a nivel Constitucional, la cual busca una representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos elección y en otros de nominación o designación en la función pública, en instancias de dirección y decisión y en las organizaciones políticas; agregándose que en las candidaturas pluripersonales se respetará la participación alternada y secuencial de hombres y mujeres.

De acuerdo a la Constitución de 2008, se establece en el artículo 65 que el *“El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de decisión y*

⁷⁴CANTOS MOLINA, Alexandra (2009) *“Justicia electoral y actores políticos: inclusión de las mujeres en la vida política”* en Estudios de Justicia Electoral. Quito. Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral.

⁷⁵ARIAS MANZANO Tania, “La Perspectiva de género en la Justicia Electoral” Publicación electrónica del Tribunal Constitucional de Panamá. <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/justicia-electoral/ponencias/tania.arias.pdf> Visitado el 02/08/2010

dirección, y en los partidos y movimientos políticos.” Con lo que se trata de fomentar en el sector público, el ingreso de mujeres y hombres de forma equitativa a cargos de decisión y dirección.

El antecedente referencial de la norma constitucional, fue la disposición incorporada en la llamada “Ley de Amparo Laboral de la Mujer” promulgada en el año 1996 y publicada en el Registro Oficial No. 124 de 6 de febrero de 1997, que establecía una cuota mínima del 20% de mujeres en las listas pluripersonales, so pena negativa de inscripción de las lista que no la cumplan, norma que por cierto, no fue acatada por los organismos civiles ni públicos, siendo derogada por el artículo 27 de la Ley 2000-1, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 20-S de 18 de febrero del 2000

A pesar de lo establecido en la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, los cuerpos políticos y las entidades públicas al frente de la supervisión y coordinación de los procesos electivos en el país, incumplieron progresivamente con la cuota electoral obligatoria, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, entidad a la que, mediante Resolución TC-098-2002 en el año 2002, el Tribunal Constitucional del Ecuador, ordenó el *“acatamiento de los principios de alternancia y secuencia en las listas pluripersonales, en la modalidad: hombre–mujer–hombre o viceversa”*.⁷⁶ Incumplimiento continuo hasta el establecimiento de la por la Tribunal Supremo Electoral de la Resolución No. 7-23-5-2007 de 23 de mayo del 2007, dónde el mecanismo de cuota se tornó exigible, mediante la aplicación de un mecanismo técnico de control por medio de *software* que identificaba las listas que incumplían con la alternabilidad y la secuencia.⁷⁷

A pesar de los incumplimientos mencionados (promovidos por órganos políticos y por la inobservancia por parte de entidades públicas), a partir del establecimiento de cuotas en la normativa nacional, el nivel de mujeres como candidatas, se incrementó desde el año 2002 progresivamente hasta la actualidad. Aunque la cuota es una medida de “acción afirmativa” sobre la presentación de candidaturas por parte de los organismos políticos, su efecto en los resultados electorales fue dramático, ya que, el

⁷⁶ Op. cit.

⁷⁷ Datos tomados de: CANTOS MOLINA, Alexandra (2009) *“Justicia electoral y actores políticos: inclusión de las mujeres en la vida política”* en Estudios de Justicia Electoral. Quito. Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral.

número de mujeres electas aumentó, aunque no en iguales proporciones. Es importante señalar que actualmente, por los cambios establecidos y la evolución histórica y normativa vigente en el Ecuador, la presentación de mujeres para candidaturas unipersonales, también se ha elevado.

Por otro lado las condiciones sociales y culturales inciden en la participación de las mujeres como candidatas, desde su posicionamiento como simpatizantes, afiliadas o militantes, pero especialmente en el proceso de selección de candidaturas dentro de las organizaciones políticas, que constituye un ámbito con dificultades de acceso para las mujeres.

En las elecciones de los años 2007 y 2009 dónde se eligieron los representantes para la Asamblea Constituyente, Prefectos y Presidente, se aplicaron las medidas de acción afirmativa desarrolladas por los cuerpos normativos imperantes, tanto la alternancia y la secuencia, como la paridad que rigió para esas elecciones. Las listas estuvieron conformadas por el 50 % de hombres y 50% de mujeres.⁷⁸

Se debe señalar, como un dato estadístico real, que en el 2009, de los 124 Asambleístas elegidos popularmente, simplemente 40 fueron mujeres, siendo que dicho valor corresponde solamente al 32,26%. Este resultado evidencia que, a pesar del establecimiento de medidas de acción afirmativa, inclinadas a eliminar discriminaciones por género, hay que prestar atención a los elementos del sistema electoral e implementar cambios estructurales en una sociedad aún regida por concepciones y prácticas de género.

⁷⁸ Datos tomados de: CANTOS MOLINA, Alexandra (2009) “*Justicia electoral y actores políticos: inclusión de las mujeres en la vida política*” en Estudios de Justicia Electoral. Quito. Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral.

2.2 LA ALTERNABILIDAD y SECUENCIALIDAD EN LISTAS PLURIPERSONALES

2.2.1. Inicios de la alterabilidad y secuencialidad en el Derecho Electoral Ecuatoriano.

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, preparó y desarrolló criterios de aplicación para sus estados miembros, para hacer posible la participación general y equitativa de los y las representantes de cada país, estableciendo una plataforma de acción que tiene como objetivo diseñar objetivos elementales para los Estados que se inclinen en el eliminar los obstáculos que imposibilitan la participación equitativa de la mujer en el campo de las decisiones económicas y políticas.

En la Quinta Conferencia Mundial por los Derechos de la Mujer realizada en Beijing, en el mes de septiembre del año de 1995, con el lema: "Acción por la Igualdad, el Desarrollo y la Paz" se formularon medidas e iniciativas para la aplicación de estas declaraciones, siendo entre las más relevantes al presente análisis:

Se insiste en que las mujeres comparten problemas comunes que solo pueden resolverse trabajando en asociación con los hombres para alcanzar el objetivo común de la igualdad entre los géneros en todo el mundo. Se respeta y valora la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentra la mujer y se reconoce que algunas enfrentan barreras especiales que obstaculizan su participación plena y en pie de igualdad en la sociedad.

Los gobiernos y la comunidad internacional acordaron un programa común de desarrollo en que la igualdad entre los géneros y la potenciación de la mujer eran principios subyacentes. La participación de la mujer en el desarrollo se ha ampliado y necesita centrarse en las condiciones y necesidades básicas de la mujer con un criterio global basado en la igualdad de derechos y la participación, la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, habría que formular políticas y programas con el fin de alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible centrado en las personas,

*medios de existencia seguros y medidas de protección social adecuadas incluso redes de seguridad, sistema de apoyo reforzado para la familia igualdad de acceso a los recursos financieros, económicos y de control sobre ellos y eliminar la pobreza creciente y desproporcionada de la mujer. Todas las políticas e instituciones económicas así como los encargados de asignar recursos han de adoptar una perspectiva de género para velar por que los dividendos del desarrollo se distribuyan por igual.*⁷⁹

2.2.1.1 Efectos jurídicos en los principios democráticos sobre participación paritaria.

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), existen diversas disposiciones en relación a derechos sobre inclusión y participación activa de mujeres, disposiciones establecidas por la aplicación de medidas de acción afirmativa y normas expresas que regulan y garantizan la participación equitativa. Al amparo de la normativa constitucional, la Asamblea Nacional ha tratado que estos principios se reflejen en la ley y reglamentos pertinentes, tal como lo hizo el “Código de la Democracia”, la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, o inclusive la Ley Orgánica del Servicio Público y las regulaciones y decretos establecidos por el Ejecutivo e Instituciones de Control. Pare efectos de nuestro estudio, se observará las medidas insertadas por el Código de la Democracia, conforme se demuestra a continuación:

El Código de la Democracia, entabla el desarrollo de **elecciones primarias con carácter mandatorio** al interior de las organizaciones políticas para la determinación de candidaturas, buscando que las candidatas o candidatos en tales elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, sean elegidos de conformidad a una participación igualitaria entre hombres y mujeres, aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad.

⁷⁹CANTOS MOLINA, Alexandra (2009) “Justicia electoral y actores políticos: inclusión de las mujeres en la vida política” en Estudios de Justicia Electoral. Quito. Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral. Resumen p. 56 a 58

Esta disposición, aún no ha podido ser aplicada (todavía no han existido procesos de elección entre múltiples candidaturas) en el Ecuador, pero será una base a ser respetada para las elecciones del año 2013 siendo que podrán plantearse recursos contenciosos-electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral.

La creación de *medidas de acción afirmativa* (en sus inicios, por medio de la Ley de Elecciones en el año 2000, dónde se instauran sistemas de cuotas e imponen la alternabilidad y secuencialidad), fue una gran logro jurídico, que se vio agradecido con el establecimiento, a nivel constitucional, de disposiciones que obligan al Estado y sus entidades a incentivar y desarrollar la paritaria de hombres y mujeres siendo que el Gobierno tendrá que implementar mecanismos que garanticen tal participación política.

Cabe resaltar que el Código de la Democracia, crea como medida de protección a las acciones afirmativas, como legitimados activa, para que **cualquier persona** (sea o no un ente político) que estime o considere que se ha vulnerado sus derechos subjetivos pueda plantear recursos y acciones contencioso electorales.

Actualmente, el Código de la Democracia desarrolló tal disposición electoral e implementó el principio construccional de manera tal que el Consejo Nacional Electoral, estará obligado, de conformidad a su numeral segundo del artículo 105 a cumplir con los *principios de equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre mujeres y hombres*, para lo cual, se abarca de igual manera las candidaturas principales como suplentes (pluripersonales) y como también inclusive en las candidaturas unipersonales tales como Prefecturas y Vice prefecturas Provinciales, entre las cuales se tendrán que presentar binomio seguidos por hombre-mujer o mujer-hombre. Por otro lado, el asignar el cargo a una mujer en caso de empate, es otra medida de acción afirmativa.

Código de la Democracia establece, en su artículo 165, menciona:

“Art. 165.-De producirse empate por el último escaño entre candidatos del mismo sexo se procederá a sortear la ganadora o el ganador entre quienes se encuentren en esta situación. Si entre los empatados se encuentra una mujer, tendrá preferencia

en la adjudicación en aplicación de las medidas de acción positiva y los principios de equidad y paridad que reconocen la Constitución y la ley, para que ésta ocupe dicho escaño.” (Énfasis agregado)

De conformidad con la información provista por miembros del Tribunal Contencioso Electoral, en el año 2009, esta entidad estatal, resolvió varios recursos contencioso electorales originados del incumplimiento o irrespeto a la normativa constitucional y legal vigente sobre paridad, alternancia y secuencialidad.

El *sistema electoral*, influye en la vida política de un país; ya que tiene efectos sobre el sistema político en vista que los resultados obtenidos en las contiendas electorales, pueden modificar drásticamente la actividad estatal, la continuación de proyectos gubernamentales y como es de esperarse las riendas del poder, las cuales, como cualquier cambio, atraen resistencias y falta de proceder.

La Constitución del Ecuador permite y obliga que la ley establezca un sistema electoral conforme a los principios de equidad, paridad y de alternabilidad para mujeres y hombres, aunque cabe señalar que actualmente, dentro de la evolución normativa que vive el país, muchos de los elementos del sistema electoral nacional, tienen una colaboración mínima o nula sobre los requerido por la Carta Magna, por ejemplo, se puede establecer que la creación de “circunscripciones electorales”, permitirían una mayor participación (al largo plazo) sobre el acceso de la mujer a grupos de poder político en vista de la mayor participación y numero de votantes dentro de una circunscripción, no obstante, los cambios realizados, determinan a que en algunas circunscripciones, se haya reducido la los escaños asignados a mujeres, debido a que el Código de la Democracia, establece en las circunscripciones electorales grandes de 17 a 12 escaños, mientras en la mediana solo 8 escaños, reduciendo a un máximo de seis escaños, situación que para nada aporta a mejorar la equidad en las participaciones electorales.

Otro elemento que dificulta la aplicación de los principios estudiados, son la lista cubierta y el voto múltiple y personalizado, aspectos que impiden o complican al principio de aplicación de listas alternadas y secuenciales debido a que para la asignación de cargos públicos en los procedimientos de elecciones pluripersonales se

aplican para la elección de asambleístas el método de cocientes (método de “Cociente Hare”) y para las demás dignidades, el método de divisores continuos (método “DHon’t”). Para lo cual, las entidades públicas que participan en los procesos electorales, se encuentran obligados a aplicar la normativa expresa de oficio, siendo que, solamente si se requiriera ante la justicia electoral, podrían aplicarse de manera directa los principios constitucionales electorales.

En cuanto a las **organizaciones políticas**, la Constitución también incorpora diversas disposiciones que procuran la igualdad, como es el mandato de que los partidos y movimientos políticos tendrán que impulsar la inclusión a sus sistemas e impedir la discriminación. Se señala que su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas, de manera que sus principios, estatutos (para el caso de los partidos políticos) y el régimen orgánico (para el caso de los movimientos políticos) al igual que la organización, estructura, funcionamiento y conformación de directivas, tendrá que observar dichos principios, y que en caso de no hacerlo, se podrá iniciar acciones que inclusive a ser resueltas por la Tribunal Contencioso Electoral.

2.2.2. El problema de la alternancia.

Simón Bolívar, en su sabio discurso de Angostura de 15 de febrero de 1819, establecía:

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”

Si bien en su discurso, Bolívar refería sobre la permanencia exclusiva e indefinida de un mandatario tras el poder. Exaltando aún más las palabras de Bolívar y de igual manera, haciendo más amplio su contenido y concepto, las palabras pronunciadas en el Congreso de Angostura, hacen referencia a la alternancia del poder. Ahora y como

objeto de este estudio, tales palabras nos llevan a pensar en la problemática de mantener en uno o unos el poder político de una nación. La alternancia debe ser indispensable en un sistema democrático, entendida esta en la posibilidad real y efectiva de quienes ocupan puestos de elección popular, cambien periódicamente por medio de procesos electorales transparentes, independientes e imparciales.

Principio altamente aceptado, la alternancia, en el campo de género, produce y ha producido alteraciones electorales e inclusive negativas sociales. Aplicando la acepción bolivariana, la peligrosidad de una larga permanencia de un ciudadano en el poder, implicaría “*usurpación y tiranía*”. Cabe preguntarse, si no ha implicado acaso una usurpación la permanencia del género masculino en el poder, sin impulsar o permitir a la mujer acceder a órganos de control.

Desde este punto de vista, sería impensable el impedir el acceso de cualquier grupo minoritario a una efectiva participación política o inclusive el no propiciar un entrenamiento o educación política a los mismos. Aunque en la realidad y en base a la preparación y capacidad política de la sociedad, se cuestiona las obligaciones normativas sobre la participación reglada en las listas pluripersonales.

2.2.3. Paridad en las Entidades de Control Electoral.

Tanto la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia, desarrollan muy bien la conformación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, instituciones que han tomado las funciones del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, y que hoy en día, tienen entre sus funciones el control electoral de la nación.

El artículo 224 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (previa selección, mediante concurso público de oposición y méritos realizado por las respectivas Comisiones Ciudadanas de Selección, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y dando cumplimiento a la garantía constitucional de equidad y paridad entre hombres y mujeres.

Por su parte el Código de la Democracia, en su artículo 20 menciona que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a los miembros principales y suplentes, de manera paritaria y alternada entre hombres y mujeres en estricto orden de prelación, entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a los principales cuando corresponda, con apego al orden de su calificación y designación.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral que se encuentren en ejercicio de sus funciones, no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos, salvo que hubieren renunciado a sus funciones en los términos de la Ley.

2.2.4. Ley Reformativa a la Ley de Elecciones (18 de febrero del 2000).

Ley de Elecciones en su Artículo 59, afirmaba: *"Para los efectos determinados en el artículo anterior, se aplicará obligatoriamente la siguiente fórmula de representación en el proceso de inscripción de candidaturas. En elecciones pluripersonales donde deban elegirse tres representantes se incluirá, al menos, una candidata mujer como principal y una como suplente, en donde se elijan de cuatro a seis representantes, por lo menos 2 candidatas mujeres principales y 3 como suplentes, en elecciones de 10 a 12 representantes, 4 candidatas mujeres mínimo como principales y suplentes, respectivamente y así sucesivamente. En elecciones donde deban elegirse 2 representantes, uno de los candidatos preferentemente será mujer, de igual forma en el caso de los suplentes"*.

El sentido de la Ley, establecía que la alternabilidad, significaba la ubicación alternada entre hombres y mujeres, y la secuencialidad uno detrás de otro o viceversa aunque existieron dictámenes o criterios del Tribunal Supremo Electoral que no consideraron frase alternada y secuencial.

La aplicación de la alternancia y secuencia en las listas para elecciones pluripersonales, sufrió muchas interpretaciones aplicadas a intereses políticos que

impidieron la verdadera aplicación de este principio de conformidad con el espíritu del legislador al momento de la creación de la norma.

2.2.5. La secuencialidad como medio de participación más justa en los órganos electorales

Como se ha mencionado y desarrollado al largo de este estudio, la Constitución de la República del Ecuador, ordena a que el Estado promueva la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en el caso de la Función Electoral, se establece su conformación paritaria es imperativa siendo que tal supuesto constitucional ha sido cumplido a cabalidad a razón que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está conformado entre sus miembros principales y suplentes, por 5 hombres y 5 mujeres, aunque, dos de las cuales con integrantes principales y por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), está integrado por 5 miembros principales y 5 suplentes, de los cuales existen 3 mujeres en calidad de juezas principales y 2 hombres. Como resultado de esta integración paritaria, y por decisión de los respectivos plenos de cada organismo, el CNE está presidido por un hombre y el TCE, por una mujer.⁸⁰

La aplicación del principio de paridad de género que rige a la Función Electoral ecuatoriana de acuerdo con en artículo 217 de la Constitución dice:

*“Art. 217.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral... Se regirán por **principios de ... equidad, interculturalidad, paridad de género, ...**” (Énfasis agregado)*

Por estos antecedentes, en las elecciones del año 2009, al designar las personas que integraban las Juntas Provinciales Electorales, se buscó respetar el principio de

⁸⁰MORENO YANES, Jorge “La Función Electoral en la nueva Constitución de la República del Ecuador”, en Estudios de Justicia Electoral, Ortiz, Richard, Editor, publicación del TCE 2009. Pg. 20 a 24 resumen

paridad en su conformación. Las Juntas Provinciales Electorales, designaron de entre sus miembros, como presidentas de las Juntas a un total de 25 % de mujeres ⁸¹

El Tribunal Contencioso Electoral, cuenta entre sus servidores con un 60% de mujeres, la mayor parte de las cuales, desempeñan trabajo en niveles de responsabilidad y asesorías, no solamente en labores de apoyo administrativo. Este organismo de reciente creación, ha observado en la composición de servidoras y servidores del Tribunal no solo el mandato constitucional de paridad de género, sino también ha incorporado a jóvenes con primer empleo, adultos mayores y personas con discapacidad⁸², de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Constitución:

*Art. 47.-... Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: ... 5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su **incorporación en entidades públicas y privadas.***

Énfasis agregado

Para la designación de otras autoridades, en las cuales no se encuentra la disposición de paridad en la Constitución o normas internas, las disposiciones que abarcan al Consejo de Participación Ciudadana, establecen la obligatoriedad de paridad en la conformación de los organismos a designarse por este organismo. Estas disposiciones se encuentran en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, de 9 de septiembre de 2009:

*“Art. 71.- **Medidas de acción afirmativa.-** Para el caso de la designación de Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, y Contralor General del Estado y en las designaciones de cuerpos colegiados (CNE, TCE, Consejo de la Judicatura) se garantizará la **integración paritaria entre hombres y mujeres ...**”*

Énfasis agregado

⁸¹ http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/Final_report/FINAL_REPORT_ESPANOL.pdf (visitada en 28 de mayo de 2010)

⁸² <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/justicia-electoral/ponencias/tania.arias.pdf> (visitada en 28 de mayo de 2010)

2.3. EL LIBRE ACCESO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POR PARTE DEL GÉNERO FEMENINO.

Breve reseña histórica

La primera mujer en presentarse como candidata en un proceso electoral y obtener la su designación por una victoria en urnas, fue la señora Bertha Valverde Álvarez, quien fue elegida como concejala de Guayaquil, por el partido socialista, en el año 1930 esto es, cabe a bien recalcar, cien años después del establecimiento del Ecuador como República.

En el campo legislativo, la ya nombrada señora Matilde Hidalgo de Prócel, fue la primera mujer en ganar las elecciones en un cargo de diputada ya en el año de 1941, siendo candidata por el Partido Provincial Liberal de Loja, sin embargo como señala la historiadora Jenny Estrada:

*“Realizada la votación, sus seguidores celebran el triunfo. Empero, al momento de enviar las listas ganadoras, el nombre de la doctora Hidalgo de Prócel no consta en el primer lugar como la voluntad ciudadana lo había decidido, sino como Primera Suplente Electa”.*⁸³

Como consta en la cita, a pesar de ser electa como principal, Matilde Hidalgo fue ubicada como diputada suplente, empero nunca fue principalizada, por lo que esta situación le impidió ejercer el cargo para el que fue elegida.

La primera vez que una mujer ejerció el cargo de diputada, fue en el año de 1960, la señora Germania López, ejerció el cargo de diputada por la provincia del Guayas.

Por lo expuesto, se puede extraer que la participación de las mujeres, haciendo un énfasis muy especial en las mujeres de descendencia indígena y afroecuatoriana, como candidatas y como electas para los cargos de elección popular, ha sido limitada. Es importante señalar que la participación de las mujeres de nacionalidades indígenas

⁸³QUEZADA, Alexandra. “Del derecho al voto a la presencia de las mujeres en la vida política nacional” en Historia del Voto Femenino en el Ecuador. Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Quito. 2009 página 153.

y afroecuatorianas en los campos políticos del país, en comparación la participación de las mujeres que no se encuentran en minoría es relativamente inferior, debiéndose a las situaciones y culturas que viven dentro de sus comunidades. A decir de la Doctora Nina Pacari, las mujeres indígenas se encuentran con una barrera de un sistema político monoétnico y un sistema patriarcal, en el cual, la independencia de la mujer, en el campo político muchas veces se ve truncada⁸⁴

De manera general la realidad histórica demuestra el escaso acceso de las mujeres al ámbito público y especialmente, a los espacios de poder y de representación política tanto en los cargos de elección como en los de designación. Esta situación, no es exclusiva de Ecuador por lo que en América Latina, actualmente existe un espacio en los índices de representación entre hombres y mujeres.

2.3.1. Áreas sensibles en la participación política reglada y su posible problemática.

La normativa constitucional ecuatoriana establece la constitución de un sistema electoral regido por principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres.

El reconocimiento de la igualdad electoral, implica un adelanto fundamental en el declaración de derechos de participación por y para mujeres. De igual forma, al establecer el principio de equidad, se da un aporte significativo para el

⁸⁴ En su publicación para el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral, titulada “La participación política de la mujer indígena en el Parlamento ecuatoriano. Una tarea pendiente”, la Dra. Nina Pacari menciona: “... *La discriminación de la mujer en materia de participación política la sufre con mayor dureza la mujer indígena. En contrapartida al avance que ha tenido la mujer en el Ecuador en materia de participación política, la presencia numérica de la mujer indígena en los espacios públicos producto de una elección popular es desoladora. En la lista de las legisladoras principales, del período 98-2002, apenas figuraba una mujer indígena kichwa del Movimiento Pachakutik y en la de suplentes algo similar ocurría con una mujer indígena ubicada en la posición doce por el partido político Izquierda Democrática, que nunca llegó a actuar en el Congreso Nacional. En la actualidad, en cambio, ninguna mujer indígena es legisladora principal ni siquiera suplente.*” Obtenido de http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pacari_Ecuador.pdf (visitado en 30 de abril de 2010)

reconocimiento y aplicación de medidas de acción afirmativa y determina expresamente, la alternabilidad entre mujeres y hombres en las candidaturas pluripersonales.

Existen diversos elementos que determinan la mayor o menor participación política y el éxito que tengan en una contienda electoral las mujeres, tales como, el principio de representación que se aplique para el proceso electoral en el que participe, siendo que su elección puede variar si la representación se establecería por mayoría o proporcionalmente a los votos obtenidos por género; también cabe mencionar, a los componentes del sistema electoral que se aplica en cada país, pues el tamaño de las circunscripciones electorales, la forma de la lista, la forma de votación y el método de distribución de escaños, cada uno y sus combinaciones, tienen efectos diversos sobre los resultados electorales respecto a las mujeres candidatas.

Además cabe destacar la influencia de otros factores como la cultura política, la obligatoriedad o no del voto, y la existencia de medidas de acción afirmativa como las ya estudiadas en este capítulo.

2.3.2. Situación actual de la mujer en los cargos públicos.

En Ecuador, diversos elementos y factores han determinado, que, en vista de las normativas respecto a la participación paritaria, ya implementadas para la elección de dignidades para la Asamblea Nacional, exista solamente un total porcentual de 32,26% de mujeres electas. Aunque cabe resaltar que dicho valor, se encuentra entre los más altos de América Latina, y a la vez, demuestra la calidad de participación que la mujer ha logrado establecer conforme a los cambios establecidos para la última década.

Respecto a elecciones unipersonales y de conformidad por los datos obtenidos por personal del Tribunal Contencioso Administrativo⁸⁵, el país, para el último ejercicio

⁸⁵Dra. Tania Arias Manzano en su informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador, (a ser analizado más adelante) establece índices participativos conforme a datos recabados por el CONAMU, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Contencioso Administrativo.

electoral, en el caso de las prefecturas correspondientes a los gobiernos provinciales, existe solamente 2 mujeres al cargo de tales dignidades, de una totalidad de 23, valor que es equivalente al 8,7 % de representación efectiva femenina al cargo de las prefecturas provinciales. Por las alcaldías municipales, el valor es inclusive hasta más bajo. De un total de 232 alcaldías, solamente existen 14 mujeres electas para representar a sus ciudades, valor que al 6,03% de mujeres electas, y aunque no muy alto, representa un avance significativo sobre el acceso femenino a cargos políticos en el país. Como un dato adicional, y en conformidad a los porcentajes demostrados en los gráficos a continuación, es curioso (u obvio) que la participación femenina en procesos unipersonales es muy inferior a la participación femenina en procesos pluripersonales, esto, debido primordialmente a la participación reglada paritaria en las listas para la elección de dos o más candidatos.



Fuente: Original CONAMU / Informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador (ARIAS MANZANO 2007)



Fuente: Original CONAMU / Informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador (ARIAS MANZANO 2007)

2.3.2.1. Índices femeninos en la toma de decisiones en cargos públicos.

Con base al mismo estudio por parte del Tribunal Contenciosos Administrativo, se puede apreciar un archivo histórico de los cargos pluripersonales con respecto a la participación femenina y su incidencia conforme a cargos de elección personal para la Función Legislativa.

Participación de hombres y mujeres en gobiernos seccionales DIGNIDAD 1996	% MUJERES ELECTAS	% HOMBRES ELECTOS
DIPUTADOS NACIONALES	0.0 %	100 %
DIPUTADOS PROVINCIALES	5.7 %	94.3 %

Fuente: Original CONAMU / Informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador (ARIAS MANZANO 2007)

Candidaturas en el ámbito nacional en el 2000 (aplicando las cuotas) DIGNIDAD 1996	% MUJERES ELECTAS	% HOMBRES ELECTOS

CONSEJEROS/AS	260 (43 %)	345 (57 %)
CONCEJALES/AS	2313 (46 %)	2713 (54 %)
JUNTAS PARROQUIALES	4921 (37 %)	8129 (63 %)

DIGNIDAD 2000	% MUJERES ELECTAS	% HOMBRES ELECTOS
CONSEJEROS/AS	20,2	79.8
CONCEJALES/AS	29.8	70.2
JUNTAS PARROQUIALES	24.9	75.1

Fuente: Original CONAMU / Informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador (ARIAS MANZANO 2007)

Estas cifras dan cuenta de que, todavía con normativa pro-mujer existió algún tipo de discriminación. De conformidad con el Concejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), es la organización social que impide la participación política de las mujeres, en vista que algunos sectores sociales establecen criterios sobre "si las mujeres tienen o no capacidad para dirigir al país". Ahora, con los cambios normativos propuestos tendría que observarse a futuro sobre las cifras de representación femenina y sus avances en la sociedad electora.

2.3.3. Comparación de la capacitación de gestión política por parte del género femenino y masculino.

a) Cifras de acceso de las mujeres a Educación y Capacitación en la región

De conformidad con los datos recabados de investigaciones realizadas por la Organización ONU Mujeres, para América Latina, se pueden apreciar las siguientes cifras:

- En la última década, el acceso a la educación aumentó en el mundo para las niñas en todos los niveles. En el año 2008 había 96 niñas por cada 100 varones en las escuelas primarias, y 95 niñas por cada 100 varones en las escuelas

secundarias. En 1999, las cifras fueron de 91 niñas por 100 varones en la escuela primaria y de 88 niñas por 100 varones en la escuela secundaria.

- La eliminación de las cuotas escolares, la asignación de becas, el establecimiento de programas de comidas escolares y de escuelas más seguras, incluyendo más maestras, han probado ser medidas beneficiosas para los índices de matriculación y retención escolar de las niñas, que deben ser imitadas.
- La brecha de género en la población no escolarizada se ha estrechado en los últimos años: las niñas que no asisten a la escuela disminuyeron de un 57 por ciento a un 53 por ciento mundialmente entre 1999 y 2008, pero en algunas regiones, el 66 por ciento de los niños que no asisten a la escuela son niñas.
- El porcentaje de niñas en edad escolar que no asisten a la escuela en las áreas rurales es más del doble que el de las áreas urbanas. En el 40 por ciento de las familias menos carenciadas, sólo una de cada diez niñas no asiste a la escuela, mientras que en el 60 por ciento de las familias más pobres, una de cada tres niñas no está escolarizada.
- Las mujeres representan casi los dos tercios de los 776 millones de adultos analfabetos del mundo.⁸⁶

Participación en capacitación política de las mujeres

En Latinoamérica, existen dificultades para obtener información regular de las mujeres que gobiernan municipios, y las limitaciones de acceso a capacitación en gestiones políticas. Aún no se reconoce la necesidad e importancia de registrar, actualizar y difundir sistemáticamente la información de las mujeres en los cargos de elección local, porque en esa medida se debería a la vez ampliar la capacitación política y fomentar el interés de las mujeres para tomar esa capacitación, de forma de optimizar su gestión política en cargos públicos.

Es también comprensible que la cantidad de municipios, la frecuencia de las elecciones y los conflictos que alteran la situación política local, hacen más laboriosa la recopilación y actualización de la información municipal, aunque también se debe

⁸⁶ Tomado de: <http://www.unwomen.org/es/facts-figures/> (visitada el 13 de junio de 2010)

señalar la falta de preocupación por la recopilación de información por parte de organismos gubernamentales.

CAPÍTULO 3

3. LA PROTECCIÓN A LA MUJER Y LA PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LA VIDA POLÍTICA ELECTORAL

3.1. LA MUJER EN LOS PARTIDOS POLITICOS

Antecedentes

Como ya se ha podido dilucidar, hasta el siglo IX, la mujer fue discriminada abiertamente en el ejercicio del poder político. Aunque a partir del siglo XX, con el desarrollo y profundización de los derechos políticos, se logró muchísimos avances en equidad jurídica, ni la libertad ni las igualdades proclamadas por las doctrinas del pensamiento liberal, fueron reconocidas al género femenino, hasta que el denominado movimiento sufragista, en determinados países impulsó y sentó las bases para la universalidad del voto, sus derechos y obligaciones.

Políticamente, el movimiento fue presa de las críticas que insistían en los cambios que se podrían acarrear con la entrada de la mujer en las decisiones sociales, así como el daño que podría causar a la autoridad masculina en el ámbito familiar. Desde grupos femeninos anti-sufragio hasta organizaciones políticas constituidas legalmente, se produjo una reacción en contra de la institucionalidad social y cultural del movimiento.

El Sufragismo instó a los países occidentales a reconocer el derecho al voto de las mujeres: el primer país fue Nueva Zelanda (1893), seguido de Australia (1901), y de la mayor parte de los Estados europeos, quienes modificaron su normativa electoral en los años siguientes. Con el finalizar de la Primera Guerra Mundial (1918), se produjo una concientización del Sufragio Universal, atrayendo consigo la consideración femenina y su participación. Con los movimientos feministas de los 70s y 80s se distanció la unidad femenina respecto al acceso del poder político. Los ideales dentro de los movimientos, eran intermitentes respecto de las funciones positivas o negativas de la participación femenina.

Actualmente, una mayor parte del Movimiento Feminista se pronuncia afirmativamente sobre la inclusión en los órganos de poder. En ciertos sectores más

radicales, se habla de una necesidad de la presencia femenina en las instituciones del estado así como en movimientos y organizaciones políticas.⁸⁷

La formación de las organizaciones políticas, responde a varios elementos, como son el cultural y el social. Tales elementos de formación, atraen a diversas funciones inherentes a las mismas, como la representación de la sociedad y la búsqueda de su bienestar, la impulsión del sistema político reinante, al mismo tiempo de aplicar y velar por el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos. Es por tal razón que las organizaciones políticas son el punto de partida para el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer y su género.

De conformidad con los porcentajes históricos de afiliación en las organizaciones con fines políticos en el Ecuador, se puede apreciar, una afiliación mayoritaria correspondiente al género masculino en comparación con el número de afiliadas en cada organización política. Ahora, tomando en consideración los puestos directivos de las organizaciones políticas, se puede apreciar de manera aún más dramática que la presencia femenina es aún más escasa en relación con hombres que ocupan tales posiciones. Dichas diferencias han sido comunes en todas las organizaciones políticas aunque en ciertos sectores políticos, más atenuadas que en otros.

En los movimientos y partidos políticos con ideologías de izquierda o centro izquierda, la afiliación y participación interna femenina, es inclusive más limitada que en aquellos con determinaciones de la derecha. En la práctica, existen tratadistas que explican la diferencia de la presencia de género en base a la ideología, por considerar que los movimientos de izquierda, son conformados en su mayoría por trabajadores y sindicalistas que históricamente han sido, mayormente establecidos por hombres. Por otro lado, en las organizaciones de derecha, las directivas femeninas han sido menores que en las organizaciones de izquierda, aunque su afiliación ha sido mayor, tomando en consideración el número de afiliadas con respecto al porcentaje de estas en cargos directivos.

Uriarte en su publicación “Mujeres en la Política” señala que ...“*el hecho de que en los partidos izquierdistas haya más mujeres directivas, aun cuando haya menos*

⁸⁷ URIARTE, Edurne **Mujeres en Política**". Facultad de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Ed. Ariel. 2006. pg. 41 a 47 resumen.

afiliadas, responde a la proximidad de estos partidos respecto a los postulados del movimiento feminista, adoptando, en consecuencia, más cuotas y medidas”⁸⁸.

3.1.1. El acceso real de la mujer en la toma de decisiones.

a) Situación Actual

Desde la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,⁸⁹ lugar que implementó políticas y medidas de cambio mediante la “Plataforma de Acción”, la representación femenina en los niveles de toma de decisiones, no ha incrementado como se tenía previsto mediante la adopción de tales políticas. A nivel regional, en los órganos legislativos nacionales de Latinoamérica, el género femenino, todavía representa un lugar minoritario, aunque cabe resaltar que los índices mundiales han aumentado así como el acceso factible de la mujer a una vida más equitativa.

De conformidad con la Plataforma de Acción, las acciones provenientes del género femenino, deben establecerse dentro de los marcos sociales, económicos y políticos de una sociedad. De acuerdo a lo establecido en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre la Conferencia de Beijing se dictaminó que “la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”⁹⁰.

Mecanismos jurídicos como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a través de los

⁸⁸ Uriarte, 1995: pg. 123 citado por: URIARTE, Edurne **Mujeres en Política**". Facultad de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Ed. Ariel. 2006.

⁸⁹La Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, fue un conjunto de reuniones organizadas por las Naciones Unidas celebradas en Beijing, China en 1995, con la participación de organizaciones femeninas de 189 gobiernos donde se acordó la eliminación de los obstáculos que enfrenta la participación femenina en las esferas de la vida pública y privada. La cuarta conferencia internacional de la Mujer, fue el antecedente para la “Declaración Política” por los derechos de la mujer, establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas.

⁹⁰ Examen y evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing: informe del Secretario General" (E/CN.6/2000/PC/2)

años han establecido medidas positivas inclinadas a la eliminación de las prácticas discriminatorias.

Siguiendo con los lineamientos establecidos en la Plataforma de Acción de Beijing, así como en numerosas organizaciones mundiales sobre la igualdad de los derechos políticos y el justo acceso a los mismos, el Ecuador, con la implantación de cambios normativos (iniciando con el Constitucional) ha buscado el implementar de forma permanente, la equidad en los sectores participativos sociales, de conformidad con el libre acceso a las funciones del poder público y político, en base a un acceso igualitario garantizado y la participación plena en el poder con capacidad para adoptar decisiones en niveles operativos y administrativos.

En las instituciones públicas a nivel nacional, se ha experimentado un cambio en sus organismos directivos, el mismo que ha iniciado procesos selectivos de personal más integradores independiente de las esferas de diferencias por sexo. Las medidas instauradas a favor de un equilibrio de género en las funciones de toma de decisiones, han establecido una mentalidad diferente sobre el acceso de mujeres al poder.

b) Participación femenina en los Procesos Electorales y Organizaciones Políticas

La participación política tanto de mujeres como hombres, en procesos donde se ventila la toma directa decisiones, así como las atribuciones operativas y administrativas, en el sector privado como público, es un fin básico del desarrollo humano, y que de igual forma, favorece al fortalecimiento de la democracia. La participación electoral, desde la doctrina de los principios democráticos, permite el interactuar de toda la población para la toma de decisiones y la elección de representantes. Ahora, el grado de interacción positiva, está en una muy estrecha relación con el grado de conciencia política que existe en la determinada circunscripción electoral. Aspecto que determina, que para el triunfo de una normativa participativa, la sociedad debe entender y convivir con la misma.

El establecimiento de listas para elecciones pluripersonales con un orden y secuencia determinados por ley pueden afectar al correcto desenvolvimiento de los cargos públicos si no se estima que determinados candidatos o candidatas, deben estar consientes de su función. Si bien, en conformidad con el Código de la Democracia, la

participación en elecciones para los miembros de la Asamblea Nacional en el Ecuador, no estima formalidades académicas extravagantes o preparación política determinada, la presentación de listas es predeterminada por ley, en el campo de su orden y secuencia, obligación que crea el riesgo de interponer candidatos para el fiel cumplimiento de la norma.

Por otro lado, la importancia de la participación femenina en los procesos electorales, y por ende, en las organizaciones políticas, se fundamenta en que, esta participación, es la base del acceso positivo y continuo al poder político y a la toma directa de decisiones en el campo tanto público como privado. De conformidad por los estudios realizados a cargo de las Naciones Unidas, en base a los lineamientos planteados por la Plataforma de Acción de Beijín, para el año 2000, a nivel mundial, existieron varios regímenes electorales adoptados por sus respectivos países, que establecieron como centro de formación, a la inclusión de la mujer de forma directa en los sistemas electorales, de manera tal que se produzca, a futuro, una participación femenina activa e incluyente. De acuerdo al informe final del secretario general de las Naciones Unidas, se señala “entre las medidas adoptadas en algunos países, cabe destacar:

- *En Albania se han promulgado leyes y enmiendas para garantizar un equilibrio de género en las listas electorales.*
- *El Yemen enmendó su ley electoral en 1998 para aumentar la participación de la mujer en las elecciones.*
- *En el Canadá la participación política de la mujer aumentó en un 50% entre 1995 y 1997.*
- *La participación de la mujer en la vida política también ha aumentado en España, que ocupa el séptimo puesto en esa esfera entre los 15 Estados de la Unión Europea.*
- *En el Camerún, El Salvador, Nigeria, el Paraguay y Seychelles, las propias mujeres han establecido redes políticas, creando vínculos entre organizaciones con base en la comunidad, los movimientos de mujeres y las mujeres que se dedican a la política”.*

A partir de tales reformas y de movimientos feministas progresistas, actualmente, (sobre todo en Latinoamérica) existen un gran número de sistemas electorales que, si bien no mandan la obligatoriedad de una participación femenina, la incentivan por

medio de elecciones primarias donde se solicita una representación minoritaria de mujeres para iniciarla (República de Panamá). Cabe señalar que, actualmente la mayoría de países que, en su momento iniciaron reformas en relación a la participación femenina en el ámbito de procesos electorales, han dado pasos más profundos y consistentes en el sentido de su obligatoriedad y las regulaciones que guían la forma y cantidad de mujeres y sus intervenciones en el género político y acceso al sistema público, tal como es el caso del nuestro, el Ecuador o también, se puede mencionar El Salvador o Costa Rica.

3.1.1.1. Género y Calidad de Gestión en Cargos Públicos.

De acuerdo el Programa de Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM por sus siglas en inglés), la dificultad en la calidad de gestión de la actividad política de las mujeres, está relacionada con la problemática que existe al momento de ejercer un cargo público por primera vez o cuando este solamente ha sido ejercido por varones, lo cual implica que la funcionaria, tendrá que preocuparse, a demás de hacer el trabajo para el cual ha sido elegida, de involucrarse y demostrar al equipo de trabajo que la rodea de su nivel de preparación para *“influir en cargos políticos, la asignación de presupuestos y la forma en que se aplican las leyes, categorías actualmente lideradas por hombres”*⁹¹.

Por su parte, la militante del partido Movimiento Europeo, que busca la inclusión participativa de la mujer en los organismos políticos del Estado, Begoña Lasagabaster afirma: *“Hasta ahora, las mujeres nos hemos ocupado de alguna manera a llegar, porque no habían mujeres en los parlamentos. Pero nos hemos dado cuenta que no sólo hay que trabajar para esto”*, añadiendo que por el momento, el desafío es influir en la construcción de la agenda política.⁹²

⁹¹ Artículo sobre el **“Fortaleciendo la gestión parlamentaria y el empoderamiento de las mujeres”**

http://www.unifemandina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=168:fortaleciendo-la-gestion-parlamentaria-y-el-empoderamiento-de-las-mujeres&catid=25:bolivia&Itemid=32. Unifem, (visitada el 23 de Octubre de 2010)

⁹² Fundación Dolores Ibarruri . **"Más mujeres en los poderes locales"**. Madrid. 2009. pg. 21

De conformidad con el Programa de Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe, en el Ecuador y en varios países de la Región Andina, el entorno social del género femenino no es diferente. Aunque es importante señalar que las reformas normativas han establecido una nueva plataforma de acción para la participación de la mujer en las funciones del Estado⁹³, por lo cual se estima que al corto plazo y de conformidad a la normativa vigente, exista una mayoría representación femenina.

Cabe señalar que, salvo pocas excepciones, la mayoría de las mujeres que hoy se encuentran en la Asamblea Nacional son nuevas, debido a que en procesos electivos anteriores, estos espacios políticos estuvieron, en su mayoría, comandados por hombres. Las mujeres, tienen ahora el papel de actuar en la esfera política del Estado para buscar apoyo tanto electoral como laboral, por lo que han de intervenir en el marco actual del proceso inclusivo en género que vive el Ecuador, al igual que ser vigilantes de la distribución paritaria de recursos, la inclusión de leyes con equidad de género y la erradicación de todo tipo de discriminación, entre otras.

Sería ilógico el señalar que en lo referente a la calidad de gestión, existe una diferencia radical entre distintos géneros. Lo que es importante señalar (tal como se lo ha realizado) es que la adaptación a determinado cargo o función, es distinta, debido a la predominancia de un género sobre otro. Como ejemplo, se podría discutir, las trabas que, en sus inicios, obtuvo la Ministra de Defensa, Dra. Guadalupe Larriva, al momento de hacerse cargo de la función militar. Dicho cargo, históricamente, fue ocupado por hombres que inclusive fueron por militares.

3.1.2. Medios de protección jurídicos para la participación.

3.1.2.1. Presupuestos Participativos

Los presupuestos participativos son *“procesos innovadores de formulación de políticas, que incorporan a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre*

⁹³ Se utiliza la palabra funciones del Estado, porque han existido reformas legales que incitan a la conformación de cuerpos colegidos con funciones administrativas y reglamentarias, con una igualdad representativa de mujeres y hombres, tanto para la función política como para las funciones administrativas de justicia, de control y ejecutivas.

políticas y asignación de recursos y la involucran en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos a través de mecanismos de veeduría ciudadana.”⁹⁴

Estos procesos, suponen para muchas comunidades un cambio radical en la manera de relacionarse entre ellos y con su gobierno, por lo que requieren de un acompañamiento muy cercano que facilite:

- El establecimiento de mecanismos que permitan una intervención real de todos los sectores y grupos poblacionales pertenecientes a una comunidad (tanto geográficos, como funcionales), asegurando de manera especial, la intervención social política de aquellos que han sido tradicionalmente apartados como las mujeres, los indígenas y afroecuatorianos, los discapacitados, etc.
- La sensibilización sobre tópicos relacionados con la política pública como son: el bien público, la redistribución, la equidad, que permitan sobreponerse de la necesidad individual y construir propuestas orientadas a la comunidad y vinculadas a un modelo de desarrollo local equitativo (tanto territorial como económico) y las políticas construidas en este sentido a nivel nacional.
- La adquisición de conocimientos y herramientas relacionados con la gestión pública (como los formatos de proyectos, los formatos de los presupuestos, etc.)
- El desarrollo de capacidades para la negociación, concertación y consenso.

3.1.2.1.1. Presupuestos participativos para hombres y mujeres

Debido a las distintas funciones que la sociedad tradicionalmente ha asignado a mujeres y hombres, éstas y éstos desempeñan distintos roles y suelen tener demandas e intereses diferenciados. Esto hace que las políticas, los programas, proyectos y presupuestos gubernamentales no sean neutrales al género, teniendo impactos diferenciados en mujeres y en hombres.

Hay experiencias conocidas de varios países que han impulsado iniciativas de presupuestos participativos en los que se demuestra que estos procesos de por sí

⁹⁴BUSCARONS Mónica, “Presupuesto participativo en perspectiva de género” publicación de la revista electrónica <http://www.tudecideixes.cat/> (visitada en 30 de octubre de 2010)

nogaranizan un enfoque de género debido⁹⁵. Los mayores obstáculos que se encuentran se deben entre otras cosas, a limitaciones en las oportunidades de participación equitativa de las mujeres en estos procesos y en relación con la priorización de los proyectos, como se describe a continuación:

a) En relación con las posibilidades y oportunidades equitativas de participación:

- Al hacer las convocatorias a la “comunidad”, se asume que todas las personas están representadas. Sin embargo, no se tiene en cuenta que “comunidad” no es un lugar neutral, y que en su interior existen diversos intereses y se dan relaciones de poder no equitativas entre hombres y mujeres (por ejemplo, las organizaciones barriales, de centros metropolitanos han estado, en su mayoría y tradicionalmente bajo el liderazgo masculino, lo cual si bien no ha obstaculizado la participación de las mujeres, ha limitado la toma de decisiones al interior de la comunidad. Cabe recalcar que en ciertos sectores de las comunidades ecuatorianas (sobre todo en sectores rurales), sobre este aspecto se mantiene una cierta forma de matriarcado, en el cual, las mujeres son las únicas que dirigen la participación barrial y su organización, los hombres son delegados más al sentido de ejecución de los dictámenes resueltos por las dirigentes comunales).
- Tradicionalmente, por la asignación de roles de género, las mujeres han permanecido en el espacio privado, como responsables del hogar y el cuidado de la familia, por lo que en, muchos casos, sus habilidades y posibilidades para ocupar el espacio público son limitadas. Por esta razón, en muchas ocasiones, cuando las mujeres están presentes en estos espacios, no participan, pues están acostumbradas a que los hombres tomen las decisiones.
- Debido a su rol de principales encargadas del cuidado de la familia, las mujeres tienen una menor disponibilidad de horarios y tiempo para participar.
- Incluso en los casos en los que las mujeres logran participar, el rol fundamentalmente “reproductivo”⁹⁶ que les asigna la sociedad, hace que en muchas

⁹⁵ Como ejemplo, se puede citar el estudio impulsado por UNIFEM para la Municipalidad de Villa El Salvador en Perú. Ver ANDÍA PÉREZ, Bethsabé y BELTRÁN BARCO, Arlette (2002): *Análisis del presupuesto público con enfoque de género. Estudio de Caso para Villa El Salvador*. Disponible en <http://www.unifemandina.org/mostrar.php?quepagina=73>.

⁹⁶ El rol reproductivo hace alusión a todas aquellas tareas que tiene que ver con el proceso de reproducción y cuidado de las personas. Incluye la reproducción, la provisión de alimentos, la confección o compra de vestido, el aseo personal, la limpieza de la vivienda, el cuidado de la salud, etc.

ocasiones sus voces expresen necesidades de “los hijos”, “las familias” o “la comunidad”, en lugar de traducir sus propias prioridades

b) En relación con los proyectos priorizados para la asignación de recursos:

- Estos no se formulan teniendo en cuenta cuales son los impactos diferenciados en hombres y mujeres⁹⁷.
- No se suele desagregar por sexo el número de beneficiarios y beneficiarias al que van destinados.
- Los proyectos no suelen tener en cuenta la situación de desigualdad existente entre hombres ni mujeres ni tampoco plantean como uno de sus objetivos disminuirla.
- En muchas ocasiones no se tiene en cuenta cómo afectan los mismos a incrementar la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, que de por si ya es alto. Tampoco este trabajo no remunerado suele aparecer considerado como aporte de la comunidad (mientras que los trabajos no remunerados de los hombres, tales como mano de obra no cualificada, si suelen ser contabilizados como aporte de la misma a los proyectos)

Por lo tanto, las experiencias de presupuesto participativo que se llevan a cabo sin tener en cuenta estos temas, pueden llegar a producir inequidades tanto en el nivel de participación de las mujeres como en el tipo de necesidades e intereses que son priorizados en los proyectos del presupuesto participativo.

3.1.2.2. Proyecto Participativo en la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional, junta con organismos de las Naciones Unidas, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), en base al Convenio Macro, de 9 de marzo de 2010, abarcan entre sus prioridades sociales, la implementación de un marco legal que busque la igualdad de género en el país. Con estos antecedentes, el

⁹⁷ Los proyectos, al igual que las políticas, no son neutrales al género y tienen un impacto distinto en hombres y en mujeres. Por ejemplo: Un proyecto que mejore la infraestructura para el acceso de agua potable redundará en una reducción de la carga de trabajo de las mujeres quienes, mayoritariamente, ha venido realizando esta tarea.

12 de mayo del 2010, las tres entidades suscribieron un plan operativo para el “Programa de Fortalecimiento de la Asamblea Nacional para la incorporación de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género entre los hombres y mujeres”, en el conjunto de los requerimientos iniciados por la Constitución de la República del Ecuador. Este Programa Conjunto es parte del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2010-2014 suscrito con el Estado Ecuatoriano el 25 de agosto del 2009.

El UNIFEM señala que los convenios suscritos, han dinamizado las capacidades y aptitudes de la Asamblea Nacional, en el campo de la legislación normas legales para la creación de regulaciones que normen la participación femenina, sobre todo en la “*discusión, aprobación, seguimiento y monitoreo presupuestario con enfoque de género*”⁹⁸. Tal como se puede apreciar con las aprobaciones y publicaciones en el Registro Oficial del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), de la ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Ley de Participación Ciudadana, entre otras, se alcanza a concluir que en cada una de estas se han impulsado mecanismos de participación paritaria para la conformación de los cuerpos colegiados con capacidad de dirección para funciones administrativas y comunes a sus atribuciones⁹⁹.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPADES) mediante el desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, busca democratizar los medios de producción y distribución de la riqueza mediante la igualdad, la integración social y territorial en la diversidad, mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración latinoamericana; garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; y

⁹⁸ Boletín de Prensa Electrónica de la UNIFEM, que se puede apreciar en: http://www.unifemandina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:en-ecuador-unifem-impulsa-iniciativas-para-garantizar-un-marco-legal-favorable-para-los-derechos-de-las-mujeres&catid=27:ecuador. (Visitado en 15 de noviembre de 2010)

⁹⁹ Como ejemplo, se puede citar el artículo 33 del COOTAD que menciona:

Artículo 33.- Consejo regional.- El consejo regional es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado regional. Estará integrado por el gobernador o gobernadora regional quien lo presidirá con voto dirimente, y por el número de consejeros o consejeras regionales que determine la ley de la materia electoral, de entre los cuales, se elegirá un vicegobernador o vicegobernadora. Los integrantes del consejo regional serán elegidos por votación popular para un período de cuatro años, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley que regule el sistema electoral. En la elección de los consejeros o consejeras regionales se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural, y la paridad entre mujeres y hombres prevista en la Constitución, así como la representación de las provincias que conforman la respectiva circunscripción territorial regional.

garantizar el acceso a la participación pública y política, de forma tal que el patrimonio nacional, sea utilizado de forma racional y responsable. Estará enmarcado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio recogidos en el Declaración del Milenio del año 2000 como lograr la educación primaria universal y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.

Con este y otros programas o planes, inclinados a la participación general de la sociedad, se busca paralelamente a lo establecido en las normas jurídicas, el lograr una participación plena democrática, aspecto muy relacionado a los fundamentos básicos de la participación paritaria.

3.1.3. Antecedentes en la Constitución de 1998 y Convenios Internacionales sobre Participación Paritaria.

Constitución de 1998

Con la puesta en marcha de la Constitución de 1998, en el Ecuador, se efectuó un cambio significativo en el campo constitucional, al momento de mencionar, entre el establecimiento de derechos fundamentales acordes con las doctrinas jurídicas modernas, se estableció la igualdad ante la ley y la no discriminación por sexo¹⁰⁰. Consecuente con este principio, en el artículo 102 de la misma carta magna, se mencionó: “El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos”. Estas medias normativas, a decir de la Dra. Zilda S. ZAMBRANO, en su estudio sobre el enfoque de género en los Municipios¹⁰¹, indujeron a su vez, leyes y reglamentos que establecían y normaban las calificaciones y presentaciones de listas para elecciones pluripersonales, motivando así a que movimientos femeninos que, obtuvieron el apoyo de algunas

¹⁰⁰El artículo 23 de la Constitución Política del Ecuador del año 2008, establece:

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:(...)

3. *La igualdad ante la ley.* Todas las personas *serán consideradas iguales* y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, *sin discriminación* en razón de nacimiento, edad, *sexo*, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.

¹⁰¹ El documento puede accederse por medio de biblioteca virtual, E-Biblioteca, de la FLACSO, disponible en: <http://www.flacsoandes.org/web/cms2.php?c=510>

diputadas integrantes en la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia del, ese entonces, Congreso Nacional, el 18 de febrero del 2000 lograran la aprobación de una Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Elecciones, en la cual, se obligaba a los partidos políticos a conformar sus listas para candidaturas de elecciones pluripersonales con un porcentaje no inferior al 30% de mujeres en calidad de principales y suplentes de conformidad a una alternabilidad y secuencialidad. Determinado porcentaje, sería elevado en un 5% por cada proceso electoral, hasta lograr una representación femenina de un 50% en las listas¹⁰².

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

En historial constitucional ecuatoriano, siempre ha reconocido, sus obligaciones en el sentido de la aplicación y promulgación de convenios y tratados internacionales debidamente suscritos que incentiven o promuevan la aplicación de derechos humanos.

El 9 de noviembre de 1981, el Ecuador ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Esta Convención, fue fruto del establecimiento de medidas de presión internacional sobre el reconocimiento de la situación en que la mujer se encontraba, respecto al ámbito social, económico, laboral y político.

El texto de la CEDAW, en su artículo 2¹⁰³, establece que los estados parte del convenio, deberán tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación

¹⁰² El Artículo de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Elecciones disponía:

Art. 58.- Las listas de candidaturas en elecciones pluripersonales deberán presentarse con al menos, el treinta por ciento (30%) de mujeres entre los principales y el treinta por ciento (30%) entre los suplentes; en forma alternada y secuencial, porcentaje que se incrementará en cada proceso electoral general, en un cinco por ciento (5%) adicional hasta llegar a la igualdad en la representación. Se tomará en cuenta la participación étnica cultural.

¹⁰³ **Artículo 2**

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

contra la mujer en la vida política y pública, adoptando conforme las condiciones lo permitan, medidas de protección activa que permitan participar en igualdad de condiciones con los hombres.

Por su parte, el artículo 4¹⁰⁴, en su texto menciona que tales medidas positivas de protección a la mujer, siempre que sean temporales, no podrán considerarse discriminatorias, mientras persistan niveles que indiquen que la mujer se encuentra en una situación de inequidad con respecto al acceso y cumplimiento efectivo de sus derechos civiles y políticos.

3.1.3. Resultados políticos de la participación femenina en el Ecuador.

a) Antecedentes.- Participación Política de las mujeres en América Latina

Como señala Alina DONOSO, a través de las últimas tres décadas, en América Latina se han experimentado una sistematización democrática que impulsa una participación social más amplia, la misma que se originó, inmediatamente después de los procesos de dictatoriales y conflictos sociales armados que se instalaron con el apoyo militar y la fuerza aplicada en contra de la comunidad.

Mientras duró el proceso de cambios y consolidación democrática de los estados latinoamericanos el movimiento femenino de esta región, tuvo un papel importante y de aporte. Así mismo la capacidad de acción y de acuerdo que las mujeres organizadas desarrollaron ha sido un paso importante para la etapa de democracia participativa, ya que en este período las mujeres lograron participar de manera

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

¹⁰⁴ **Artículo 4**

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

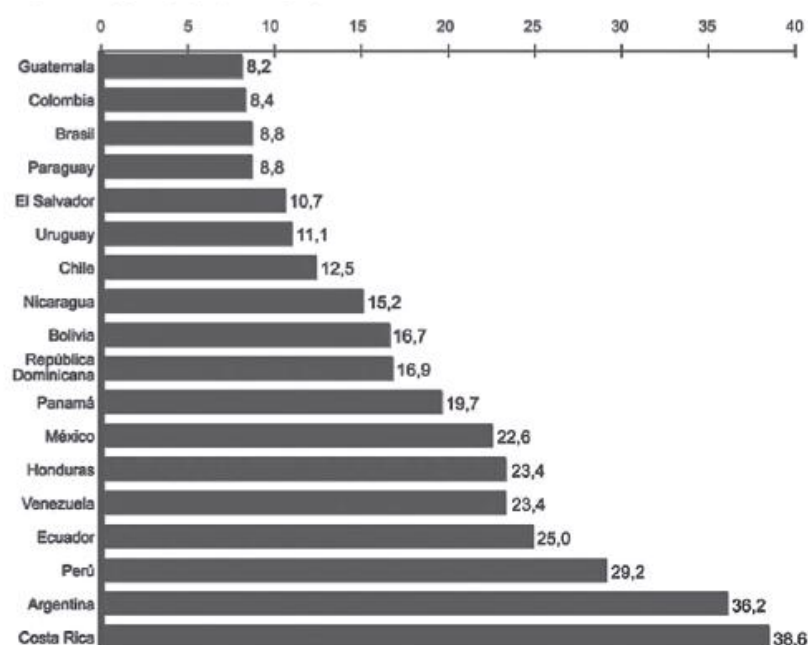
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

importante dentro de la escena política, exigiendo que sean escuchadas sus demandas sobre la equidad de género y participación ciudadana.

Durante la primera década del siglo XXI, los países de América Latina hicieron cambios significativos en los marcos jurídicos relativos a la participación política de las mujeres para dar mayor estabilidad a la demanda de la equidad género y a la creación de instrumentos para enfrentar la discriminación. Además se han creado redes transnacionales de mecanismos de avance de la mujer¹⁰⁵.

Dentro del contexto antes descrito, en esta última década se han consolidado los mecanismos institucionales en género de todos los países de la región, los sistemas electorales han establecido medidas de protección activa que han permitido que más mujeres ingresen satisfactoriamente como candidatas procesos electorales y cada vez más son elegidas. En el siguiente cuadro se puede obtener un esquema general de los niveles de participación femenina en el campo político en conformidad a elecciones pluripersonales de los cuerpos legislativos de cada país.

Representación, en porcentajes, de las mujeres en el Parlamento (Cámara Baja o Única) para el año 2006.



¹⁰⁵ DONOSO, Alina, Participación Política de las mujeres en América Latina, revista Global Hoy No. 16, 2008, Ciudad de Panamá, Panamá.

Fuente: Estudio sobre la Participación política de las mujeres, realizado por Alina Donoso (2007)

3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

3.2.1. Función Electoral.

3.2.1.1. El Concejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el artículo 217 de la Constitución Ecuatoriana de 2008, la Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos con sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia.

Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.

Por otro lado el artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes:

“1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones.

Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados.

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos.

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley.

5. *Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral.*
 6. *Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.*
 7. *Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto.*
 8. *Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus directivas,*
- y verificar los procesos de inscripción.*
9. *Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos.*
 10. *Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas.*
 11. *Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan.*
- Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el Registro Civil.*
13. *Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción político electora”*

3.2.1.2. Acciones del Tribunal Contencioso Electoral.

De conformidad por lo establecido por la Dra. Tania Arias Manzano en su informe sobre la perspectiva de género en la justicia electoral en el Ecuador, las instituciones del estado, por mandato constitucional¹⁰⁶ “*están obligadas a incorporar el enfoque de género en sus actividades administrativas y jurisdiccionales*”¹⁰⁷.

¹⁰⁶El artículo 70 de la Constitución Política del Ecuador (2008) manda lo siguiente:

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público

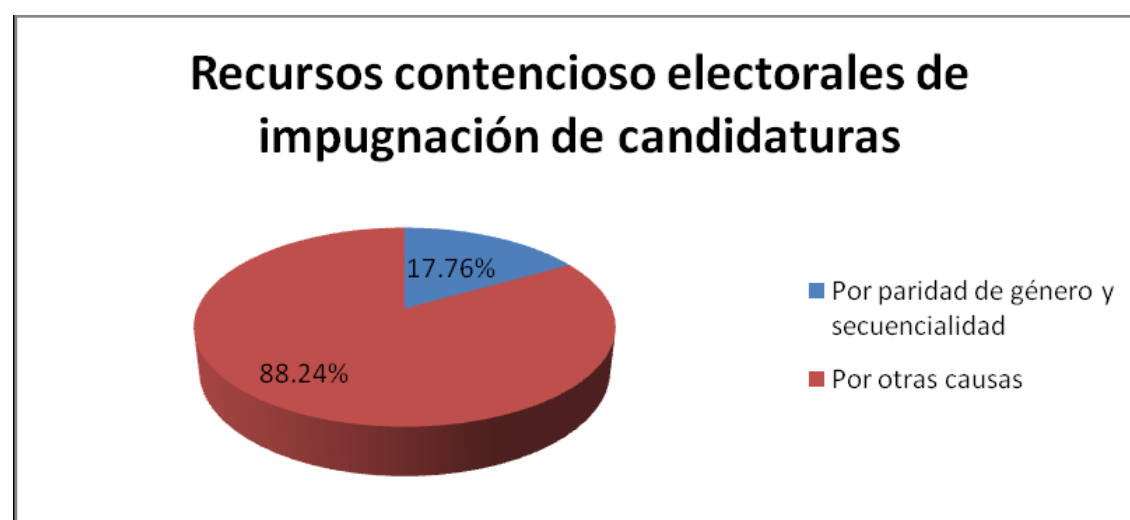
¹⁰⁷ARIAS MANZANO, Tania “**LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA ELECTORAL: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR**” publicación electrónica del Tribunal Electoral de

En dicho informe, la Dra. Arias, presentó un estudio sobre las estadísticas pertenecientes al Tribunal Contencioso Electoral, en las cuales se puede determinar el actuar social de acuerdo al acceso jurisdiccional en el campo electoral en razón de género, durante el proceso electoral del año 2009 y durante el juzgamiento de tesoreros únicos de campaña en el año 2010, de acuerdo a los siguientes reportes:¹⁰⁸

a) Recursos sobre paridad, alternancia y secuencia en las listas pluripersonales

Tanto el Régimen de Transición, instaurado por la Asamblea Constituyente (2008) en el cual se contemplan los periodos de transición entre la Constitución de 1998 y la de 2008, como el Código de la Democracia, dieron lugar a que se presenten, para los procesos electivos de 2009 sobre las listas de candidaturas pluripersonales, listas que debían cumplir con los principios de alternabilidad y secuencialidad, es decir, se debía interponer a la paridad en la conformación de las listas para las elecciones.

Conforme la información obtenida, en el Tribunal Contencioso Electoral, por incumplimiento de la paridad, alternancia y secuencia, en la conformación de listas, se presentaron 10 recursos de impugnación a la inscripción de candidaturas, conforme se demuestra en el siguiente cuadro:



Panamá sobre las Ponencias de la II Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/justicia-electoral/> (19/11/2010)

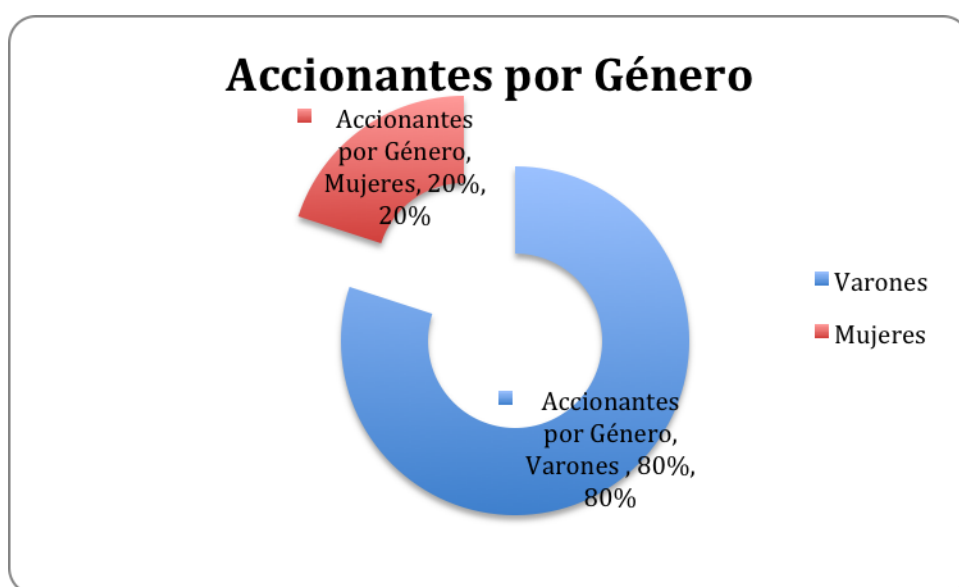
¹⁰⁸Solo se han tomado en consideración los reportes e investigaciones pertinentes, en relación a género y participación femenina en vías políticas y jurisdiccionales.

Fuente: ARIAS MANZANO, Tania, PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA ELECTORAL: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Tribunal Contencioso Electoral, de manera correcta aplicó las normativas vigentes para aceptar las impugnaciones a dos listas, de esta manera, se “ha aplicado el mandato constitucional de discriminación positiva para mejorar la posibilidad que un mayor porcentaje de mujeres ocupen cargos de elección popular”¹⁰⁹.

b) Apelaciones e Impugnaciones

El siguiente cuadro, se hace referencia al porcentaje de participación que tuvieron tanto mujeres como hombres, en el uso de los recursos de apelaciones e impugnaciones, ya sea de manera directa o como representantes de organizaciones políticas, de forma tal que se pretende demostrar el acceso o utilización de recursos en razón del género:

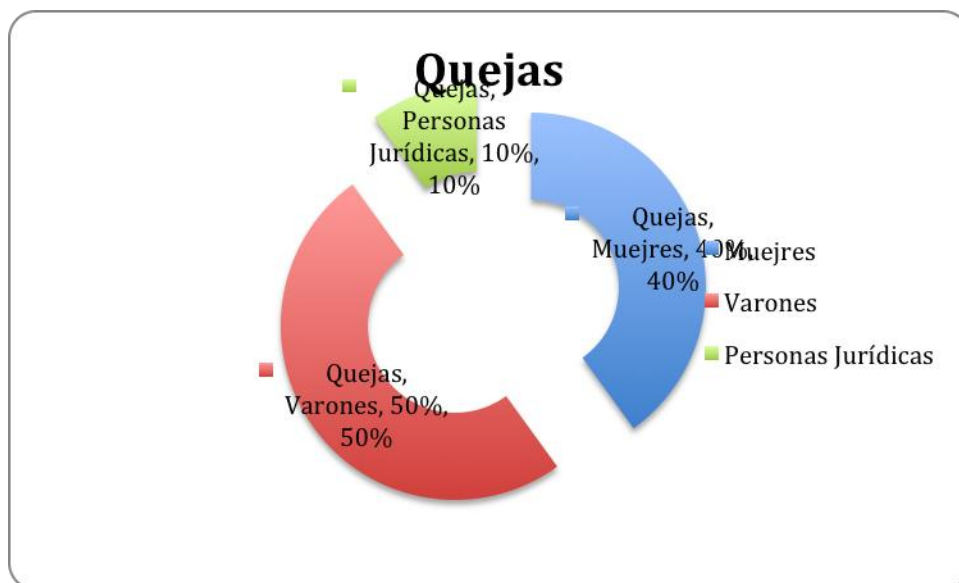


Fuente: ARIAS MANZANO, Tania, PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA ELECTORAL: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

c) Quejas

¹⁰⁹ARIAS MANZANO, Tania “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA ELECTORAL: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” publicación electrónica del Tribunal Electoral de Panamá sobre las Ponencias de la II Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/justicia-electoral/> (19/11/2010)

En cuanto al género de los accionantes en el recurso electoral de queja existe una mayor paridad entre hombre y mujeres, ya que hubo un 40% de procesos es los que participaron mujeres como presuntas infractoras, mientras que en el caso de los varones fue del 50%. Esto se explica porque la mayoría de las quejas se presentaron en contra de los miembros de órganos colegiados, los mismos que de conformidad con la normativa constitucional vigente, han sido conformados de manera paritaria por hombres y mujeres:



Fuente: ARIAS MANZANO, Tania, PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA ELECTORAL: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El acceso a los órganos jurisdiccionales electorales, permite una mayor participación de la comunidad sin que medie una diferenciación radical sobre el género de los accionantes o accionados.

3.2.2. Educación Electoral.

En el Capítulo Cuarto del Título II de la de la Constitución de la República del Ecuador que hace referencia a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades garantizan la vigencia de estos en la vida política, económica, social y cultural del país. Por otro lado el Capítulo Quinto del mismo Título en referencia los derechos de participación es el sustento legal de esta iniciativa.

La Educación Cívica Intercultural está encaminada al desarrollo, socialización y reflexión alrededor de los derechos y deberes con los que contamos las ecuatorianas y ecuatorianos, así como de los valores humanos, cívicos y culturales fundamentales para la convivencia armónica en una sociedad intercultural. A nivel nacional, se ha implementado el programa de “Educación en Democracia” el mismo que busca educar sobre los valores y prácticas democráticas mediante la participación y el conocimiento político. El programa, desarrollado por el Ministerio de Educación busca incluir a servidores públicos, estudiantes y padres de familia, tomando en consideración a la existencia de una diversidad cultural en el país.

Como puntos claves del programa, se puede destacar:

- Interiorizar los postulados de la Interculturalidad para llevarla a una práctica cotidiana.
- Conocer los conceptos básicos y enunciados constitucionales con respecto a la interculturalidad.

CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. CONCLUSIONES.

La complejidad jurídica que acompaña al desarrollo de los Estados democráticos, exige a la sociedad controlar el desarrollo de sus pueblos, mediante normas que consideren de manera efectiva los intereses colectivos; científicos, culturales, políticos etc. En el campo electoral, ésta relación simbiótica es aún más pronunciada que en otras ramas del Derecho, pues tanto electores como elegidos son afectados directamente por las disposiciones que regulan su participación en el proceso electoral. No se puede definir una reforma legal, sin pensar en las consecuencias sociales que determinada norma acarreará.

La participación paritaria -tanto de mujeres como varones- dependerá en gran medida del propio interés que la sociedad demuestre en el proceso electoral. Es necesario por lo tanto, que la propia sociedad sea la encargada de impulsar la participación paritaria a través de medios que permitan a sus candidatos o candidatas ocupar cargos de elección pública. Uno de estos medios será, desde luego, sistematizar de manera satisfactoria las normas que regulan el acceso y la designación de candidatos de elección popular.

Sin embargo, es necesario actuar con cautela, pues la participación paritaria no puede ser aplicada únicamente por el mandato legal. Los principios de carácter jurídico que están detrás y que sustentan de forma directa, la participación paritaria -libertad e igualdad- son fundamentales en la definición de un sistema electoral democrático y, por consiguiente, deberán ser entendidos y aplicados de manera justa de para favorecer la participación de ambos géneros, pero sin que esto, se convierta en un abuso por parte de las personas beneficiarias de la norma.

A lo largo de este estudio, se ha podido apreciar una visión alternativa sobre la representación social; sus límites actuales, sus proyecciones futuras y sobre todo sus elementos. La participación paritaria, como un presupuesto funcional para una democracia más representativa, es indispensable en el establecimiento de sociedades mejor personificadas, donde cada ciudadano o representado, puede verse reflejado política y socialmente en su gobernante o representante ante un cuerpo legislativo y político. El reflejo de un elector con su gobernante, produce un apego mayor a sus lineamientos de gobierno y por ende, mejora la gobernabilidad y estabilidad de un país o circunscripción electoral.

Si bien en el Ecuador, el plan normativo se encuentra casi completo, (en el campo jurídico) inclusive tomando en consideración, la reciente creación de leyes que, si bien se encuentran alejadas del tema electoral, abarcan la participación paritaria en la conformación de los órganos directivos de las entidades que forman parte del sector público, todavía es necesario trabajar en la inclusión y apersonamiento de los principios establecidos en la ley en el diario vivir de la sociedad.

Es interesante cuestionarse sobre la necesidad de una representación paritaria o inclusive sobre la oportunidad de la misma en la situación social actual. A nuestro criterio, es justa una representación democrática de todos o la mayoría de entes participantes en un proceso electoral, siempre que tal representación no actúe en desmedro de los derechos de otros partícipes. Las medidas de acción positiva en el campo electoral, si bien, al corto plazo impiden o complican el libre ejercicio de unos sobre la base de la limitación a la capacidad de ser elegido de otros, estas medidas, por su función, deben ser de carácter temporal, inclinadas a un equiparamiento razonable entre la representación masculina y femenina, el mismo que, después de alcanzarse debería suprimirse en vista del derecho de los electores de poder elegir entre las mejores o los mejores participantes en un procesos electoral. Ahora, habría que verificar, de conformidad a futuras e inclusive las actuales elecciones, qué personajes políticos y **públicos**¹¹⁰ han sido beneficiados en base a una representación

¹¹⁰ Entiéndase a la definición de personajes públicos, a aquellos que, sin tener algún roce político, por motivo de sus apariciones o actividades públicas, deportivas, informativas o inclusive de

paritaria, y sobre todo, qué organizaciones políticas han accedido a puestos de dirección política en base a la selección de candidatos y en especial, candidatas, que han vendido una imagen social muy alejada de una capacidad política.

El cambio propuesto por la normativa electoral, debe estar acompañado con planes o programas de capacitación y educación democrática que indiquen a la comunidad, los beneficios de una sociedad paritaria. Sin un adecuado sistema de educación en democracia, es éste y todos los campos, las novedades jurídicas implementadas por las leyes de carácter político-administrativo caerían en desuso o, peor aun, se propendería a un abuso de las normas.

Es primordial que los entes encargados de una educación democrática, dinamicen los procesos jurídicos que buscan la inclusión de mujeres y hombres por igual en el campo electoral.

Se necesita que las mujeres (y hombres) participen electoralmente, con la calidad, seriedad y respeto que la contienda electoral demanda, así, la sociedad podrá elegir a sus candidatos sobre la base de su talento y capacidad más que sobre la base de su género.

Contamos, durante en transcurso del estudio, con un número amplio de estadísticas que demuestran que la participación activa y política de mujeres va en aumento y son elegidas para desempeñar cargos públicos, pronosticando carreras políticas prósperas; el número de legisladoras nunca ha sido mayor que el establecido hoy en día. En el Ecuador, la cantidad de alcaldesas (aunque la paridad no es un requisito para la presentación de las o los candidatos para esta dignidad, debido a que la misma es de carácter unipersonal), que ejercen esa función, nunca ha sido mayor. Estos indicadores, nos muestran que las reformas electorales, en efecto han comenzado ya, a

entretenimiento, han logrado establecerse en el campo político, auspiciados por determinada organización política que busca, conforme a esa participación, una presencia en

brindar sus frutos. La mujer, ha iniciado una preparación de sus oficios políticos, de forma tal que se ha establecido un camino sólido que pretende preparar al género femenino en el campo socio-político.

Los logros políticos obtenidos por algunas mujeres son, sin lugar a dudas, un elemento de inspiración para que otras mujeres a inicien carreras políticas.

Al final del camino, es simplemente, la búsqueda de **representación** lo que ha impulsado los cambios estudiados en esta investigación. Los elegidos y elegidas, no pueden separarse de los motivos por los cuales han sido elegidos o elegidas, la sociedad ha buscado representarse por medio de sus gobernantes, ellos se deben a sus mandantes y por lo tanto deben representarlos con la calidad, capacidad y preparación que un cargo público lo merece.

4.2. RECOMENDACIONES

Para lograr estos objetivos, es importante señalar el trabajo interno a ser realizado por las organizaciones políticas que tienen en sus manos el presente y futuro político del país. En muy contados casos¹¹¹, y con vista a las normas reguladoras sobre la participación y presentación de listas en elecciones pluripersonales, se han comenzado capacitaciones en género para sus militantes, de forma tal que, tanto hombres y mujeres tengan iguales nociones y entrenamiento político para gobernar.

En este mismo sentido, las elegidas, no pueden olvidar el porqué de las normas que impulsan la paridad política, no pueden dejar a un lado los motivos por los cuales, todo el sistema electoral está diseñado para permitir un acceso real del género femenino al los órganos públicos. La búsqueda de una participación equitativa, debe

¹¹¹ Las organizaciones políticas de creación reciente (p.e. PAIS), han instaurado entre sus organigramas, lineamientos que incentivan a una participación más inclusiva en el campo de género.

inclinase al futuro acceso igualitario de sus participantes, mas no es un mecanismo para permitir que cierto género acceda, conforme a ciertas facilidades normativas, acceda y una vez en este, busque el establecerse permanentemente, en detrimento del otro.

Como ya ha sido establecido, en última instancia son los empadronados en una determinada circunscripción electoral, los que eligen a sus dignatarios. Para que tal elección, se vea acompañada de una representación en género, es imprescindible que los candidatos y las candidatas, participen de forma continua y coherente en la política del país. Es necesario que los entes políticos, fuera de alguna distinción en género, sean debidamente capacitados. Por su parte, muchas organizaciones políticas con incidencia nacional, de conformidad con la información recabada¹¹², todavía, no son inclusivas en el campo de género hacia mujeres. En sus directivas, por ejemplo, solamente el 5% se encuentra conformadas por mujeres y de este 5%, el 4% no son cargos directivos con capacidad de decisión. Por lo tanto, puede apreciarse que muchas de las participaciones en procesos electorales actualmente, han sido establecidas sobre la marcha de los cambios o propuestas normativas que se han impulsado en la última década.

Como se ha mencionado anteriormente, los grupos históricamente afectados por la inequidad en relación al tema político y de género tienen que continuar con preparación constante, para poder participar entre iguales y representar a la población. Es necesaria una capacitación política-administrativa para las candidatas y candidatos que se presentan a determinado proceso electoral, de manera que el cambio propuesto por las normativas constitucionales, legales y reglamentarias, vaya de la mano con la preparación política por parte del concursante.

¹¹²Respecto al Partido Social Cristiano, sus directivas se las puede localizar en la página web: <http://www.partidosocialcristiano.org/directiva.pdf> (visitada el 01/01/2011). Respecto al Movimiento Popular Democrático, sus directivas se las puede localizar en la página web <http://www.mpd15.org.ec/directiva.php> (visitada el 01/01/2011) Respecto al Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik, sus directivas se las puede localizar en la página web: <http://www.pachakutik.org.ec/home/contenidos.php?id=57&identificaArticulo=187>) (visitada el 01/01/2011) Respecto al Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, sus directivas se las puede localizar en la página web: <http://www.sociedadpatriotica.com/top.php> (visitada el 01/01/2011)

La implementación de una educación electoral, que sea participativa, democrática y política, que busque calidad de la mano de incentivos que permitan abrir el camino político para nuevas generaciones, es esencial si se busca una democracia sin límites de género. Con la educación electoral, se deben constituir, de conformidad con los avances normativos, el elecciones pluripersonales, listas de carácter balanceado en equidad y calidad con medidas democráticas conforme a una igualdad social.

La búsqueda del ingreso a de la mujer a la vida política de una nación, no solamente debe nacer en proceso de elecciones. Para una consolidación democrática, las colectividades sociales involucradas deben ser debidamente representadas, por lo tanto es esencial que se construya un proyecto político, por parte de los organismos políticos que se fundamenten en la presencia de calidad política y gubernamental de los representantes elegidos o a elegirse, tanto para hombres y mujeres, aunque, cabe recalcar que por la prescencia actual, y en aumento del género femenino, se debe trabajar en mayor grado sobre su inclusión y capacitación, de forma tal que se fortalezcan los conocimientos y se rompan, en la comunidad, conflictos y estereotipos.

La participación paritaria, no puede ser utilizada simplemente como un requisito u obligación interpuesta por una ley. Los alcances y fundamentos de la paridad Los alcances y fundamentos de la paridad son importantes al momento de definir un sistema electoral, y por tal, los mismos deberán ser necesarios para establecer una representación real por parte de la sociedad en un sistema democrático que busque igualdad política.

La fiscalización accionada por los entes políticos, hacia los candidatos o candidatas de determinadas listas, también debe ser un punto fundamental al momento de la presentación de la calificación de las listas. Si bien, es un derecho político la posibilidad del ser elegido, la presentación de candidatos, solamente por el

cumplimiento del requisito legal, debe ser consiente y responsable, en vista de los intereses que impone tal proceso social. Por lo tanto, es un deber cívico que la sociedad y los partícipes activos en las campañas electorales, establezcan medidas políticas para calificar socialmente a los candidatos y candidatas presentados.

Por los motivos expuestos, consideramos que está en manos de los organismos políticos al igual que de la sociedad, el buscar que tan singulares y a la vez debatidas reformas, sean implementadas en función de su creación y, como objetivo final, se universalice la participación política sin que tenga que mediar una consideración de género o sexo para el elegir un candidato o candidata.

BIBLIOGRAFÍA

- CONDORCET, "Essai sur l'admission des femmes au droit de cité", 1790 en DUHET Paule-Marie, *Las Mujeres y la evolución*. Barcelona (España), Ed. Península, 1974
- ESTRADA Jenny, *Una mujer total*, Matilde Hidalgo de Procel, Universidad de Guayaquil, 1980.
- BOBBIO, Norberto, *Los principios de la democracia*, Barcelona. 1985.
- QUIÑONES TINOCO, Carlos Sergio, *La equidad en la Contienda Electoral*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002.
- GRIJALVA JIMÉNEZ Agustín, *Elecciones y Representación Política*, Quito, Corporación Editora Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, 1998.
- Diccionario de la Real Academia de la Lengua
- SIMÓN RODRÍGUEZ, María Elena, *Democracia Vital*, Editorial ANAGRAMA, Madrid, 1999.
- ARISTÓTELES, *Política*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983.
- SAAVEDRA RUIZ, P, *La democracia paritaria en la construcción europea*, CELEM, 2000.
- ASTELARRA, J., *Las mujeres podemos: otra visión política*, Icaría, Barcelona, 1986, pág. 65.
- GARCÍA PELAYO, M. *Las funciones de los modernos parlamentos bicamerales*, Caracas, Congreso de la República, 1971
- SARTORI, Giovanni, *Elementos de ciencia política*, Barcelona, Ariel 1986
- NORRIS Pippa, "La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa" Educación Pública, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2002.
- POWELL, Bingham Jr. (1980), "Voting Turnout in Thirty Democracies: Partisan, Legal, And Socio-Economic Influences" in Richard Rose, *Electoral Participation A Comparative Analysis*. SAGE Publications. Traducción.
- DALTON, Russell , *and Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Western Democracies*. London: Chatham House. Traducción. 2006.

- Fernando REY MARTÍNEZ, *La discriminación positiva de mujeres (comentario a propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad de 17 de octubre de 1995, asunto Kalanke)*, *Revista Española de Derecho Constitucional*, n° 47.
- REY MARTÍNEZ, Fernando *El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo*. MacGraw-Hill. Madrid.
- JIMENEZ, David. *Discriminación positiva, acción polémica*. Editorial Lo blank. Valencia 2003.
- URIARTE, EDURNE y ELIZONDO, Arantxa. *Mujeres en Política* Ariel. Barcelona 1997.
- BARREZUETA. María de los Ángeles. *Tratamiento discriminatorio*
- PELETEIRO Isabel et GIMENO Antonio, *La situación de la mujer en la toma de decisiones* Instituto de la Mujer 1999. España
- BAREIRO, Line; SOTO, Clyde (eds.): *Sola no basta. Mecanismos para mejorar la participación política de las mujeres*, Asunción: FES / CDE, 2007.
- CANTOS MOLINA, Alexandra (2009) “*Justicia electoral y actores políticos: inclusión de las mujeres en la vida política*” en Estudios de Justicia Electoral. Quito. Ecuador. Tribunal Contencioso Electoral.
- SCOTT W., Joan, *El Género: una categoría útil para el análisis histórico*, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, d/f.
- QUEZADA, Alexandra. “*Del derecho al voto a la presencia de las mujeres en la vida política nacional*” en Historia del Voto Femenino en el Ecuador. Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Quito. 2009 página 153.
- URIARTE, Edurne, *Mujeres en Política*, Facultad de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco. Ed. Ariel. 2006. pg. 41 a 47 resumen.
- DONOSO, Alina, *Participación Política de las mujeres en América Latina*, revista Global Hoy No. 16, 2008, Ciudad de Panamá, Panamá.
- Fundación Dolores Ibarruri, *Más mujeres en los poderes locales*, Madrid. 2009. pg. 21

FUENTES VIRTUALES

- PACARI Nina, *La participación política de la mujer indígena en el Parlamento ecuatoriano. Una tarea pendiente*, Internet http://www.quotaproject.org/CS/CS_Pacari_Ecuador.pdf (visitada el 17 noviembre de 2009)
- Proyecto ACE, Condiciones de Equidad en la Contienda Electoral. <http://aceproject.org/main/espanol/pc/pc21.htm>(visitada desde noviembre 2009)
- http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/Final_report/FINAL_REPORT_ESPA_NOL.pdf (visitada en 28 de mayo de 2010)
- MACIAS JARA María, Democracia Representativa Paritaria. Instituto de Filosofía CSIC. Revista Virtual 2007. www.ifs.csic.es/postgrad/jurilog/mayo07.pd(visitada el 06 de julio de 2010)
- ARIAS MANZANO Tania, “La Perspectiva de género en la Justicia Electoral” Publicación electrónica del Tribunal Constitucional de Panamá. <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/justicia-electoral/ponencias/tania.arias.pdf> (visitado el 02 de septiembre de 2010)
- Tomado de: <http://www.unwomen.org/es/facts-figures/> (visitada el 13 de junio de 2010)
- **“Fortaleciendo la gestión parlamentaria y el empoderamiento de las mujeres”**http://www.unifemandina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=168:fortaleciendo-la-gestion-parlamentaria-y-el-empoderamiento-de-las-mujeres&catid=25:bolivia&Itemid=32. Unifem, (visitada el 23 de Octubre de 2010)
- Examen y evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing: informe del Secretario General" (E/CN.6/2000/PC/2)

- BUSCARONS Mónica, “*Presupuesto participativo en perspectiva de género*” publicación de la revista electrónica <http://www.tudecideixes.cat/> (visitada en 30 de octubre de 2010)
- Ver ANDÍA PÉREZ, Bethsabé y BELTRÁN BARCO, Arlette (2002): Análisis del presupuesto público con enfoque de género. Estudio de Caso para Villa El Salvador. Disponible en <http://www.unifemandina.org/mostrar.php?quepagina=73> . (visitada el 17 de octubre de 2010)
- Boletín de Prensa Electrónica de la UNIFEM, que se puede apreciar en: http://www.unifemandina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:en-ecuador-unifem-impulsa-iniciativas-para-garantizar-un-marco-legal-favorable-para-los-derechos-de-las-mujeres&catid=27:ecuador. (visitada en 15 de noviembre de 2010)
- **Derechos políticos y ciudadanía de las mujeres una vía género sensitiva y paritaria al poder y al liderazgo**, biblioteca virtual, E-Biblioteca, de la FLACSO, disponible en: <http://www.flacsoandes.org/web/cms2.php?c=510> (visitada el 27 de octubre de 2010)

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE LICENCIADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR


DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, MARIO ANDRES PAREDES BALLADARES, C.C. No.: 171675599-4, autor del trabajo de graduación intitulado: "PARTICIPACIÓN PARITARIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LAS ELECCIONES PLEURIPERSONALES Y EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN EL ECUADOR", previa a la obtención del grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.-Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 24 de mayo del 2011


C.C. No.: 17675599-4